

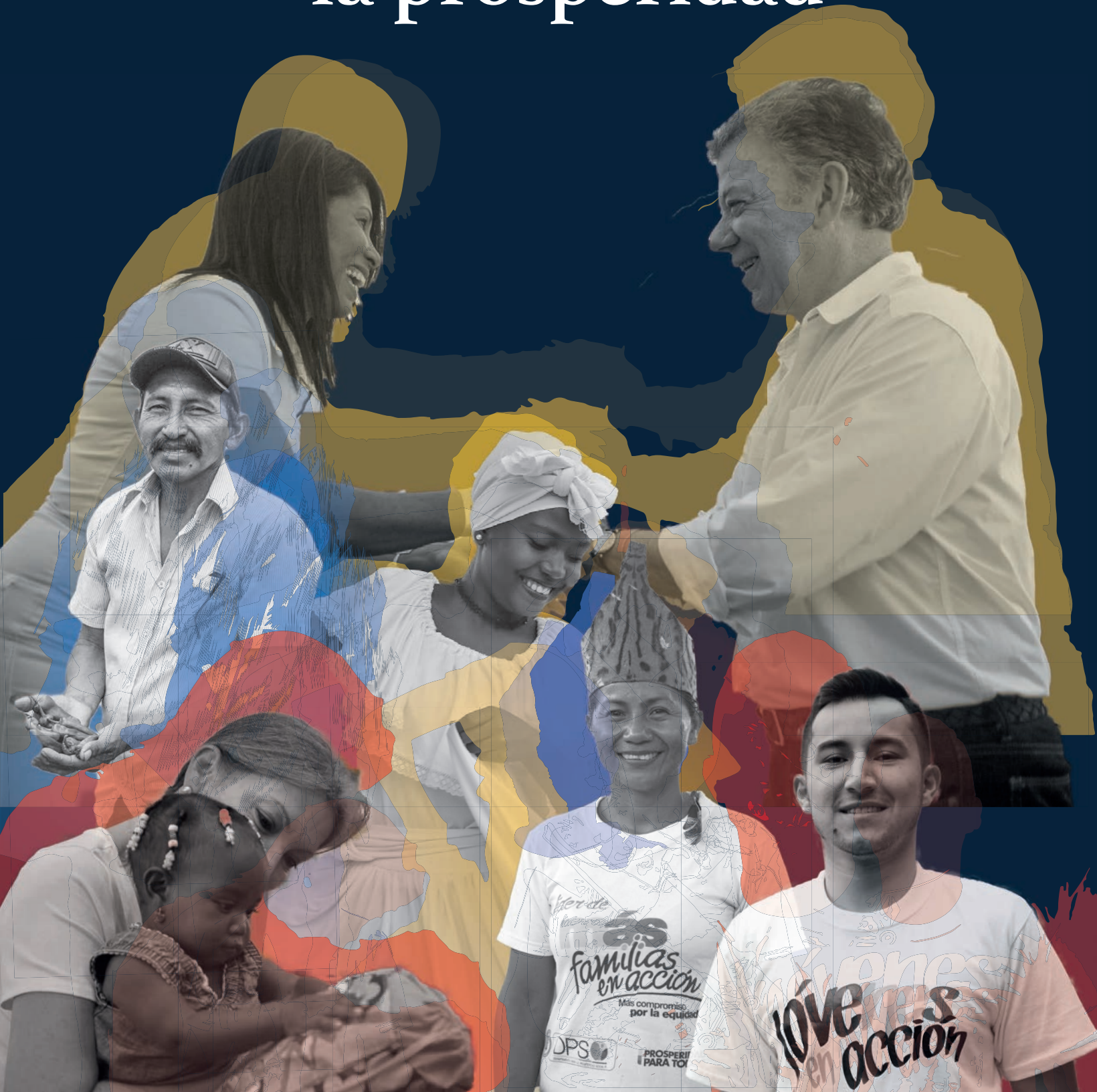


PROSPERIDAD SOCIAL



GOBIERNO DE COLOMBIA

# Legado para la prosperidad



Herencia  
familias  
en acción  
Más compromiso  
por la equidad  
DPS  
PROSPERIDAD  
PARA TODOS

Herencia  
familias  
en acción











# CRÉDITOS

Juan Manuel Santos Calderón  
Presidente de la República

Nemesio Roys Garzón  
Director General Departamento para la Prosperidad Social

Diana Marcela Londoño Espinel  
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Edición: Santiago Alberto Burgos Bolaños

## Redacción de textos:

Carmen Cecilia Villamizar Baez  
Dania Paola Asprilla Yurgaqui  
Yenny Alexandra Alvarez Guarín  
Diana Paola Navarrete Vargas  
Santiago Alberto Burgos Bolaños  
Centro Nacional de Memoria Histórica  
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  
Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas

## Corrección de textos:

Valentina Restrepo Tobón  
Carmen Cecilia Villamizar Baez

## Fotografías:

Joel Enrique Gonzalez Forero  
Emilio Aparicio Rodríguez  
Dania Paola Asprilla Yurgaqui  
Diana Paola Navarrete Vargas

## Diseño y diagramación:

Gina Morón Araujo  
Ana María Angel Osorio

Prosperidad Social  
Bogotá D.C., Colombia  
Calle 7 No. 6 - 54  
Tel: (571) 5960800  
[www.prosperidadsocial.gov.co](http://www.prosperidadsocial.gov.co)



# PRESENTACIÓN

Han sido ocho años de la única guerra que valió la pena: La guerra contra la pobreza.

Hacer un balance de los ingentes esfuerzos en la lucha contra la pobreza no estará nunca completo hasta que hayamos conseguido su superación absoluta y no exista una sola persona que sufra este flagelo.

Insistentemente y a lo largo de todo el país, hemos sostenido que mientras exista un pobre en nuestra Colombia, tenemos razones más que suficientes para seguir luchando esta guerra y trabajar sin descanso para que todos los colombianos vivamos con bienestar, inclusión social y reconciliación. Esta es una lucha de todos, no solo de los que tenemos la gran oportunidad de trabajar en el estado sino también de aquellos que desde otros sectores quieren un nuevo país.

Al terminar este periodo de gobierno, estamos orgullosos del trabajo que en conjunto hemos realizado y que podemos legar a las nuevas administraciones. Aquí dejamos una institucionalidad fuerte y eficiente, con la capacidad de seguir asumiendo esta gran responsabilidad a favor de los más vulnerables, y que es un compromiso moral innegociable.

Este libro de legado es un resumen de los grandes logros que hemos obtenido como Nación, y que son parte fundamental de la construcción de una paz completa, estable y duradera. Es una promesa tallada en el nombre del sector que encabezamos, el de la Inclusión Social y la Reconciliación. Logros conseguidos por la articulación de esfuerzos de todas las entidades del Estado, con el sector privado, con las comunidades, con la comunidad internacional; y, especialmente con las entidades adscritas: Centro Nacional de Memoria Histórica, Unidad de Atención y Reparación para las Víctimas y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Indudablemente, la lucha contra la pobreza es difícil pero gratificante, y esa satisfacción del deber cumplido la vemos en la vida y experiencias de millones de colombianos que han podido superar la pobreza. Aquí, están esas experiencias, logros, cifras y vivencias de este gran esfuerzo para que todos los colombianos tengamos siempre un nuevo amanecer.

Nemesio Roys Garzón  
Director General  
Departamento para la Prosperidad Social





## Índice

PRIMERA PARTE: Un sector para la Inclusión Social y la Reconciliación.....	11
Un camino hacia un país sin pobreza y en paz.....	13
Centro Nacional de Memoria Histórica: historias para transformar el país.....	31
El legado de la Unidad para las Víctimas.....	43
La niñez: prioridad del gobierno Santos.....	52
SEGUNDA PARTE: Historias de un nuevo amanecer.....	63
Valeriano Domínguez, un líder del campo para la ciudad.....	64
Dos historias de derrota a la pobreza extrema.....	71
Ganó la vida: Breiner y su familia ahora están en su tierra.....	77
Si amanece en Cauca.....	82
La memoria de los gunadule se reconstruye en sus espacios comunitarios.....	90
Música de Amanecer.....	96



PROSPERIDAD SOCIAL

#PROGRESANDO

CON EDUCACIÓN  
SUPERANDO











A person wearing a blue cap and a blue shawl, with their hand painted blue, holding up a blue handprint. The background is blurred, showing green foliage and a building.

Un camino hacia un país  
sin pobreza y en paz



En los últimos ocho años, 5,4 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional. Un resultado innegable que refleja un trabajo sostenido de distintas instituciones del Estado colombiano, muchas de las cuales se rearmaron o crearon en 2011 precisamente para poder conseguir estos logros inéditos en la construcción de un país en paz y equidad.

Lo más importante del resultado está reflejado en las historias de la gente que hoy cuentan con mejores condiciones de vida. Pero habla también de los logros cuantificables de un Estado repotenciado que aplicó nuevas formas de entender y afrontar lo que asumió como retos fundamentales del país: la construcción de una paz duradera y estable y la guerra contra pobreza. Contiene muchos procesos trenzados entre instituciones públicas, aliados privados y organizaciones sociales, comprometidos incluso con una nueva forma de afrontar un reto tan grande como innegociable: puede ser el mayor compromiso moral y ético que ha tenido Colombia como nación.

Ese compromiso está expresado en la construcción de un sector específico para concentrar la energía del Gobierno en la lucha por la justicia social. Es para esto que existe desde 2011 el Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación. Lo conforman la Unidad para la Reparación y Atención de las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, entidad que lo encabeza.

En un reto interrelacionado con la necesidad de la construcción de paz, se llevó a cabo el ejercicio paralelo de terminar un conflicto interno de medio siglo, apostando por la reconciliación y no por la confrontación. Una guerra que, como se lee en apartes posteriores, hizo de este un país de víctimas: las más de 8 millones que están registradas.

## Entender la pobreza de forma distinta para abordarla de forma distinta

Es tentador arrancar desde un término del enunciado inicial: pobreza multidimensional. Colombia ha sido pionera en mediciones alternativas de pobreza, como advierte el consultor económico Roberto Angulo Salazar. Desde la década de 1980 el país aplicó el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), de la mano de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). De hecho, la Cepal introdujo el método a varios países de la región a comienzos de esa década, esperando aprovechar la información de los censos demográficos y de vivienda en la caracterización de la pobreza. Muchos de sus investigadores siempre advirtieron que su utilidad estaba precisamente como instrumento de caracterización, más que como metodología de medición propiamente dicha.

“Ningún indicador nos ofrece una visión integral de la situación de las personas. Por esto es necesario analizar el indicador de pobreza monetaria, diferentes medidas de distribución del ingreso y la más reciente medición de la pobreza multidimensional, que conjuntamente nos ofrecen la posibilidad de mejores decisiones de política pública”, expone Olga Lucía Acosta, experta de la Cepal en Colombia.

¿Por qué es importante comenzar por un concepto de pobreza? En este caso, y tal como puede evidenciarse en varios discursos y ejercicios desde el Gobierno -y en la voz del mismo presidente Juan Manuel Santos-, la adopción de un nuevo concepto de pobreza estuvo íntimamente vinculada a toda una nueva forma de abordarla y enfrentarla.

Al comenzar el primer periodo de Santos, el proceso de ajuste del IPM para Colombia estaba avanzado, recuerda Angulo. Ahora analista independiente, él fue uno de los expertos que desde el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ajustaron el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) para Colombia.

Había sido lanzado al mundo por la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano (OPHI, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Oxford y era respaldado por la Oficina del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es de la autoría de Sabina Alkire, directora de OPHI, y del profesor James Foster, de quien Roberto Angulo nos recuerda: “Es una autoridad mundial en términos de diseño de indicador de pobreza, con el artículo científico más citado en toda la historia de la economía sobre la pobreza”. Su valor justificó incluso que reemplazara el Índice de Pobreza Humana que había sido eje de los Informes sobre Desarrollo Humano anuales desde 1997.

En Colombia, una de las particularidades del IPM es que fue ajustado desde el sector público con uso orientador de política pública. “Es un indicador que surge con una discusión colegiada entre técnicos y *policy makers* (el anglicismo para nombrar a quienes hacen las políticas públicas). Pero también con validación en las comunidades”, expresa Angulo. Está armado con base en cinco dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y juventud, salud, trabajo, acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda.

En el primer Plan de Desarrollo de la Presidencia de Santos, *Prosperidad para todos* (2010-2014), quedó como indicador de seguimiento de política pública. “El objetivo de desarrollar este módulo de instrumentos -IPM incluido- de focalización geográfica es el de dotar a los programas sociales con un instrumento que permita dirigir la política social a conglomerados de población”, ordena el Plan. En 2012, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes: el 150 de 2012) lo adoptó como medida de pobreza complementaria a la medición oficial de pobreza monetaria, delegando su cálculo al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Con el IPM, el Gobierno potenció al menos tres dimensiones: pudo tener más claridad sobre las

brechas y la severidad de la pobreza, además de la incidencia; pudo hacer mejor seguimiento a la política pública contra la pobreza en cada una de sus variables, y pudo focalizar mejor las políticas para apuntar a las mayores carencias y a quienes más las sufren.

En palabras del Director de Prosperidad Social, el IPM “es mucho más eficiente pero más difícil de



superar. Por eso es tan satisfactorio para nosotros ver que en 2010 arrancó en 30 por ciento y hoy cerramos el gobierno con un 17 por ciento”.

## Concepto y políticas públicas

Un concepto hecho indicador no resuelve los problemas. Pero la forma de gestionarlo desde el Gobierno sirve de metáfora del proceso transformador que vino con esta lucha contra la pobreza. “Desde el inicio del gobierno iniciamos un trabajo articulado en todas las entidades del Estado para superar la pobreza en Colombia. Fue importante asumir que pobre no es sólo el que no tiene recursos monetarios. La gente requiere educación, salud, vivienda digna y servicios públicos eficientes, programas de atención para niñez y la juventud”, recuerda Roys.

Roberto Angulo recuerda que para la construcción del primer plan de desarrollo de Santos se instalaron tres mesas: una de pobreza, una de empleo y una de defensa y seguridad. Que dos de las tres mesas fuesen de asuntos sociales, da una pista del enfoque que se pretendía para superar décadas -¿un par de siglos, quizá?- de conflictos y disputas. El país, específicamente las zonas apartadas, venía de sufrir la cresta del conflicto armado -entre 1991 y 2008- y apenas se reponía de los años más sangrientos de enfrentamientos -entre 1995 y 2005-.

“En la (mesa) de pobreza se reunieron todos los ministros que tenían que ver con el tema. Comenzaron a detonar articulaciones y sinergias. Los ministros, en diálogo con DNP, veían reflejada su meta y sus desafíos. Era presidida por el Presidente de la República y era indelegable. Había

una tabla de control donde estaba el IPM, el índice monetario y el Gini (medida de la desigualdad). No se puede decir que gracias al IPM se toman estas decisiones, pero es un generador de debates y de discusiones”, recuerda Angulo.

Roys y Angulo están describiendo la Mesa Transversal de Pobreza y Desigualdad, un comité de alto rango del poder ejecutivo establecido para monitorear la reducción de la pobreza en el país. Con el Presidente al frente, su trabajo fue hacer seguimiento de la estrategia de reducción de la pobreza. Fue convocada al menos dos veces al año durante el primer periodo Santos. El DNP y Prosperidad Social asumieron la Secretaría Técnica y participaban todos los ministerios e instituciones directamente involucrados en la estrategia nacional de reducción de la pobreza y desigualdad: Educación, Salud, Vivienda, Desarrollo Rural, Trabajo y Hacienda, los dos mencionados departamentos administrativos con rango ministerial y el DANE. Dependiendo de la agenda de cada reunión, asistían también entidades como el ICBF.

**Desde el inicio del gobierno iniciamos un trabajo articulado en todas las entidades del Estado para superar la pobreza en Colombia.**

*Nemesio Roys, director de Prosperidad Social.*

Las discusiones en esa mesa dieron a luz programas tan relevantes en la lucha contra la pobreza como Jóvenes en Acción (JeA), el programa de Vivienda Gratuita -coordinado desde el Ministerio de Vivienda, pero con participación de Prosperidad Social- y la transformación de Más Familias en Acción (MFA).

## Antecedentes

Era 2011. El país venía de acumular décadas de conflicto y de políticas apenas medianamente exitosas en la búsqueda de la equidad, limitadas por su carácter accesorio en el ejercicio del



Gobierno. Durante toda la primera década del siglo XXI, los informes del DNP insistieron en postular la crisis económica de finales de la década del 90 como punto de giro de política social. El informe de *Avances y retos de la política social en Colombia*, publicado en 2010, señala que terminando el siglo pasado “el desempeño de la economía colombiana presentó una disminución en su dinámica”, provocando la caída del crecimiento económico. Una verdad de a puño: el impacto de la crisis se sintió con multiplicada intensidad en las poblaciones más vulnerables.

Así leyó la Cepal el cierre de década: “El incremento de la pobreza entre 1995 y 2000 se ha debido totalmente al incremento en el desempleo; de no ser por el incremento en el nivel de la educación de los hogares y la reducción en el tamaño del hogar, la situación hubiera sido más crítica (...) El mayor nivel de pobreza aparece relacionado positivamente con los incrementos en el desempleo y la inflación, y con la mayor regresividad en la

distribución del ingreso; incrementos en la tasa de cambio real y en el salario mínimo real disminuyen la pobreza”.

Era 2011. La promoción social y la reducción de la pobreza estaban en la agenda del Estado, pero justo detrás de las políticas de defensa y el crecimiento económico. Así había sido desde finales de los años noventa, cuando el país, estrenando su progresista Constitución Política de 1991, enfrentaba aquella crisis, la peor que ha sufrido desde 1930. Los hogares la asumieron a fuerza propia sacrificando la educación de los jóvenes en edad escolar y la calidad de la nutrición preescolar, sugiere el investigador Jorge Llano en diversas publicaciones sobre el impacto de Familias en Acción. Precisamente, como subsidio condicionado, a este programa se le rastrea su gen en esa crisis, patrocinado inicialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).





Era 2011. Algunos de los programas que este gobierno potenció para alcanzar los logros a los que aporta el inédito Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación habían tomado carrera. Además de Familias en Acción, la estrategia Unidos -nacida como Red Juntos en la década que terminaba-, demostraba resultados. Su antecedente se halla en el trabajo de la Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (MERPD), que en 2004 se propuso el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ajustados como metas del documento Visión Colombia II Centenario 2019. Entonces propuso crear una Red de Protección Social contra la Pobreza Extrema para atender de forma prioritaria a 1,5 millones de hogares. Quedó formalizado en un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes): el número 102 de septiembre de 2006.

La ejecución de la estrategia fue asignada a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Esta última fue creada un año antes sobre la estructura de la Red de Solidaridad Social, a la que fueron integradas la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional (ACCI) y el Fondo de Inversiones para la Paz (FIP). Acción Social se concentraba en estrategias de desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto, en promover y proteger los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, en un contexto de conflicto que era enfrentado desde el discurso y práctica de la seguridad democrática.

## Construir sobre lo avanzado

Era entonces 2011. El Gobierno expidió el Decreto 4155, creando el Sector de la Inclusión Social. Erigió el Departamento Administrativo de Prosperidad Social -sobre la estructura de Acción Social- y la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) como una de sus entidades adscritas. También integró a un mismo sector las mencionadas Unidad de Víctimas, el CNMH y el



ICBF, como parte de una reconfiguración de toda la institucionalidad.

Fue una reforma consecuente con objetivos principales del Plan Nacional de Desarrollo (2010–2014): superar la pobreza extrema y consolidar la paz en todo el territorio nacional, la seguridad y la plena vigencia de los derechos humanos y la protección de las víctimas del conflicto. Esta transformación otorgaba un marco más amplio para la política social en Colombia, concentrando esfuerzos, reuniendo y ordenando iniciativas para mayores impactos en la atención a la población pobre y víctima de la violencia, primera infancia, y la población de los territorios focalizados para hacer posible una sociedad próspera para todos.

Se suele postular la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como un punto cero de este entramado de objetivos, que asume lo fundamental de la dignidad de la población que ha sufrido la guerra y la desigualdad. Sin ser la ley fundadora del sector, seguro hace parte importante del camino de instituciones articuladas para el diseño de las políticas, planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y la reintegración social y económica. En síntesis, el objetivo del sector que encabeza Prosperidad Social.

Prosperidad Social asumió su rol como cabeza del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación desde las siguientes líneas estratégicas: (i) Consolidación y fortalecimiento de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas, (ii) Desarrollo de capacidades y potencial productivo para el emprendimiento y la empleabilidad

de la población en pobreza y/o en situación de desplazamiento del conflicto armado, (iii) Robustecimiento de los programas especializados para el Posconflicto y el restablecimiento de los derechos de la población víctima, (iv) Profundización de la inclusión financiera de los hogares en situación de pobreza, (v) Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y (vi) Profundización de las acciones afirmativas en materia de reducción de la pobreza para la población indígena y afrodescendiente.

**En el último cuatrenio del presidente Santos, los temas de paz, equidad y reducción de la pobreza han sido los más importantes a desarrollar, contemplados en el Plan de Desarrollo.**

*Luis Fernando Mejía, director del DNP.*

## Las cifras generales

Los resultados de los que puede dar cuenta el país en esta materia son tan cuantificables como evidentes en la vida cotidiana de esos millones de personas agrupadas en la estadística. Justo antes de terminar estos dos periodos iniciales de viraje hacia una política donde la justicia social ocupa el centro, el DANE informó que la pobreza medida por ingresos se redujo de 40 a 28 por ciento entre 2010 y 2017. Luego en ese periodo, 4,7 millones de personas alcanzaron la línea de ingresos mensuales suficientes para sostener servicios y bienes básicos. Y como se enuncia al principio de este texto, 5,4 millones de personas superaron la pobreza multidimensional, que bajó hasta 17 por ciento.

Varias dinámicas explican la buena noticia. En el caso de la tradicional medida de la pobreza monetaria, el director del DNP, Luis Fernando Mejía, sugiere que ha sido fundamental la estabilidad macroeconómica del país, traducida en generación de empleo. En cuanto a la reducción de la pobreza multidimensional, destaca la reducción de barreras de acceso a la salud -de la que está pendiente seguir mejorando la calidad-

los programas de vivienda gratuita y los subsidios de interés para vivienda media. “En el último cuatrenio del presidente Santos, los temas de paz, equidad y reducción de la pobreza han sido los más importantes a desarrollar, contemplados en el Plan de Desarrollo. Los temas de equidad se trasladan en proyectos de inversión relacionados con programas de acceso a subsidios a transferencias monetarias y esto permite a través de metas muy puntuales garantizar el cumplimiento de la reducción de la pobreza”, agrega.

La relación entre la paz como ausencia de guerra y la justicia social se ve reflejada en el campo colombiano. La pobreza por ingresos en el área rural pasó de 49,7 por ciento en 2010 a 36 por ciento en 2017, una reducción de más de 13 puntos porcentuales. Además, la pobreza multidimensional bajó de 53,1 por ciento a 36,6 por ciento, caída incluso mayor que la referente a la monetaria. Es un paso importante en el saneamiento de la profunda deuda con la ruralía que este Gobierno también expuso al realizar el Censo Nacional Agropecuario y develar las condiciones desiguales para más de 5 millones de pequeños campesinos que viven muy lejos de la calidad de vida de las ciudades y en contradicción con la riqueza de grandes terratenientes: un 0,4 por ciento de la población posee el 46 por ciento de la tierra. Expuso los retos y se concentró en la búsqueda de soluciones. Para eso fue la Misión para la Transformación del Campo Colombiano, coordinada por el DNP, de cuyas estrategias transversales Prosperidad Social ha echado mano para ajustar muchos de los programas que tiene a cargo.

Hay muchos retos pendientes. Pero lo avanzado es muy relevante. En todas las regiones del

país disminuyó la pobreza, especialmente la multidimensional. En el Caribe colombiano más que en cualquier otra, al pasar de 45,5 por ciento a 26,4 por ciento. Eso habla de 1,6 millones de personas que superaron múltiples trampas de la pobreza. Dejó de ser la región más pobre del país, pero no porque las otras quedaran estancadas: unas 850.000 personas superaron la pobreza en la región Oriental, 671.000 en la región Central y 250.000 en la región Pacífica.

**El panorama mejoró para el total nacional. Y el dominio rural fue la zona que mejor desempeño tuvo. Esto plantea un desafío para los próximos presidentes.**

*Roberto Angulo, analista.*

“El panorama mejoró para el total nacional. Y el dominio rural fue la zona que mejor desempeño tuvo. Esto plantea un desafío para los próximos presidentes. Y es que en esta transición hacia un campo sin las Farc -Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-, los hogares han estado mejorando las condiciones de vida. Eso lo debe atender cualquiera que venga a gobernar. Esta transición está asociada a una mejora sustantiva y notable del bienestar de la zona rural”, comenta Roberto Angulo.

Los resultados comparados van en la misma medida. Olga Acosta, de la Cepal, expone: “Colombia ha presentado una reducción sostenida de la pobreza, de la pobreza extrema o indigencia desde 2002, que se destaca en el contexto latinoamericano. Además de un satisfactorio desempeño económico, las políticas públicas convirtieron la reducción de la pobreza en una prioridad. Desde el 2015, el fin del *boom* de precios de hidrocarburos y de otras materias primas, se refleja en un menor crecimiento económico en los países de la región. Sin embargo, en Colombia no ha aumentado la incidencia de la pobreza, mientras que en el promedio de América Latina, se percibe un incremento”.





## Hitos de Prosperidad Social

No hay entidad alguna que pueda adjudicarse el mérito exclusivo por lo alcanzado en esta lucha contra la pobreza. Bien lo advierte Acosta: “Lograr mejores resultados y reducir las brechas de bienestar de la población requiere la coordinación de diferentes agentes que trabajan en el territorio. Además de la administración nacional y local, es necesario lograr mayor coordinación de los diferentes agentes (sector privado, Organizaciones no Gubernamentales, organizaciones comunitarias) en el territorio. La evaluación de las regiones con mejores resultados permitiría extraer lecciones para zonas con hondos rezagos”.

Así lo ha hecho el Gobierno nacional. Pero el aporte de una entidad que encabeza el sector creado para concentrar gran parte de los esfuerzos en esa lucha debe estar -y está- a la altura y al frente del propósito. Como cabeza de ese sector, Prosperidad Social cierra el doble periodo presidencial en que fue creada dejando

repotenciados dos de los programas emblemáticos que heredó, conectándoles con otras estrategias estructurales y exponiendo grandes resultados en toda su ejecución.

Más Familias en Acción es desde 2012 ley de la República. Este programa de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) fue rediseñado además para que su tercera fase ayude a reducir las brechas entre lo urbano y lo rural. Aumentó la cantidad del incentivo en las zonas más pobres del país e incrementó los correspondientes a educación, de acuerdo con el grado escolar, para fortalecer la permanencia en secundaria. En lo posible, ahora se conecta con Jóvenes en Acción, programa de TMC creado en 2013 para reducir las barreras de acceso e incentivar la permanencia de jóvenes pobres en la educación superior.

Con MFA durante este Gobierno fueron apoyadas 2,5 millones de familias, a través de las cuales 4,5 millones de niños, niñas y adolescentes recibieron incentivos económicos para salud y educación.



La inversión superó los 13 billones de pesos, concentrándose en garantizar que los niños de las familias vinculadas al programa asistan a todos los controles de crecimiento y desarrollo de acuerdo con su edad hasta que cumplan 6 años; y en que los niños, niñas y adolescentes -entre los 4 y 18 años- de esas familias que están vinculados al sistema escolar asistan al menos al 80 por ciento de las clases y superen todos los grados.

De las familias vinculadas al programa, unas 219.000 han superado las condiciones de pobreza y han sido promovidas del programa y 800.000 jóvenes han culminado su educación media (grado II) con apoyo de las transferencias. Las evaluaciones del programa demuestran que ha elevado en 6,4 puntos porcentuales la probabilidad de terminar el bachillerato para los jóvenes -entre 18 y 26 años- beneficiarios del programa y que los niños que entran al programa en edades tempranas tienen mejores resultados en pruebas cognitivas y de matemáticas. En salud, reduce el retraso en crecimiento o desnutrición crónica, incrementa la talla promedio de los niños y niñas, especialmente en las zonas rurales y reduce -hasta un 23 por ciento- la inseguridad alimentaria para los hogares en zonas rurales. Esto y mucho más: si se mide el impacto conjunto de los programas de TMC, su incidencia en la reducción de la pobreza y pobreza extrema es de 1,3 puntos porcentuales, según los cálculos más prudentes. Entonces, en ausencia de estos, 607.000 personas caerían bajo la línea de pobreza y 615.000 bajo la línea de pobreza extrema.

Ese otro programa de TMC, Jóvenes en Acción, existe para empalmar con la cadena de promoción de MFA. Vincula a bachilleres entre 16 y 24 años,

que estén en cierto margen de puntaje en el Sistema Nacional de Beneficiarios -acorde con su región y zona de residencia-, que estén registrados en la Red Unidos, en el Registro Único de Víctimas en condición de desplazamiento, que hagan parte de pueblos indígenas o en listas de adoptabilidad del ICBF.

Los más de 431.000 participantes han recibido transferencias que están condicionadas a su permanencia en estudios técnicos, tecnológicos y profesionales en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y otras instituciones públicas de educación superior (IES). Desde 2013 requirió una inversión de 1,1 billones de pesos.

Su reciente evaluación muestra que ha sido una inversión de gran retorno social. Incrementa en 29 por ciento la probabilidad de acceso al SENA, en un 12 por ciento la probabilidad de que un joven beneficiario acceda y se certifique de esa institución, y en un 50 por ciento la probabilidad de que un participante -de nivel de formación tecnológica- tenga un empleo formal. En las otras IES, disminuyó en un 40 por ciento la probabilidad de deserción de los jóvenes participantes que se encontraban matriculados cuando arrancó

la operación. El programa ayuda a que sus participantes se dediquen al estudio sin presión de trabajar: sólo el 4 por ciento de los participantes que estudian en IES dividen su tiempo con un empleo formal. Más adelante en esta publicación, las historias compartidas por Luz Estrella Tobón y Yenifer Pulgarín, participantes de estos programas, ayudarán a poner rostro a los logros de esta estrategia. Parte de su vida está contada en el siguiente capítulo.

**Lograr mejores resultados y reducir las brechas de bienestar de la población requiere la coordinación de diferentes agentes que trabajan en el territorio.**

*Olga Lucía Acosta, experta de la Cepal en Colombia.*

## Unidos, creación e integración de la ANSPE

Si algo extiende el papel de Prosperidad Social por todo el país y -con eso- su reconocimiento, es la Estrategia Unidos. Su reconfiguración es un ejemplo de la articulación, el tejido y la complementariedad de las estrategias coordinadas desde un departamento que replica íntegramente el objetivo interinstitucional de la mencionada Mesa Transversal de Pobreza y Desigualdad. En un esfuerzo enorme, se recogieron políticas sociales que se aplicaban de forma desarticulada, diseñando otras medidas para apuntar a las dimensiones de marginalidad que antes no eran contempladas.

Era 2011. El Estado creó también la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), buscando mejorar, focalizar y asegurar la oferta integral de promoción social para la población más pobre. Este fue un escenario de

discusiones intersectoriales sobre retos pendientes para la superación de la pobreza extrema. De la mano de Prosperidad Social, articuló el trabajo de investigadores internos y externos, empresa privada, universidades, organizaciones sociales, con el conocimiento de los participantes en los programas. Gracias a ese fuerte componente de investigación y generación colectiva de conocimientos, lideró el ejercicio innovador del sector para encontrar salidas eficientes a los problemas de pobreza de muchas comunidades, promoviendo el acceso a oportunidades reales para favorecer el goce efectivo de derechos.

En 2011 la estrategia de superación de pobreza extrema quedó a cargo de la ANSPE. O dicho de mejor forma: la estrategia se transformó también en ANSPE. “La estrategia de superación de pobreza ya no es un programa, es una entidad pública, una agencia que ha encontrado en la Constitución Política una gran sombrilla que le sobrecoge su accionar. El sector de la Inclusión Social y Reconciliación es sustantivo para el Gobierno”,



decía Beatriz Linares en 2014. Linares era entonces -y lo fue hasta su muerte- directora de la agencia.

Los éxitos y trabajo acumulado de la ANSPE y su aporte al sector se potenciaron a partir de 2016, cuando más que una agencia, pasó a ser parte nuclear de Prosperidad Social, en una fusión que garantizó la continuidad y complementariedad de sus exitosos programas. Un grandísimo reto: la gestión de la estrategia tiene como referencia 26 indicadores denominados logros familiares, alineados con las metodologías oficiales de medición de la pobreza por ingresos y multidimensional. Estos logros se dividen en Requeridos y Deseables. Para ser promovidos, los hogares acompañados deben alcanzar los logros Requeridos.

Cerrando el gobierno, 365.000 hogares acompañados por Unidos han superado la pobreza extrema. Quedan 1.060.000 hogares vinculados a este programa, que se hizo ley para blindar sus acciones de los “ires y venires” de la política nacional. De eso está protegido ahora el proceso de Valeriano Domínguez y su familia, que en Pasto (Nariño) están a punto de conseguir la promoción del programa, es decir, de alcanzar los logros requeridos. Cómo lo han hecho y aquello que podrán dejar atrás, se expone en la historia que comparte en el capítulo siguiente.

En la reconfiguración de Unidos, Prosperidad Social incorporó enfoque diferencial, considerando también las diferencias entre lo urbano y lo rural para el cierre de las brechas. Y también un enfoque para trabajar con comunidades étnicas, centrado en territorios colectivos: resguardos indígenas y tierra de comunidades negras. Busca fortalecer las capacidades colectivas de las poblaciones

localizadas en el proceso de superación de la pobreza.

El modelo rural se concentra en zonas dispersas de municipios considerando la clasificación de ruralidad hecha por la Misión para la Transformación del Campo Colombiano. Promueve el desarrollo de capacidades para la población y mecanismos para el acceso a activos sociales basados en el fortalecimiento de vínculos territoriales, organización comunitaria y la asociatividad. En las ciudades, se concentra en los barrios o comunas con mayores niveles de pobreza y en los hogares más pobres. Da acompañamiento especializado y diferencial a aquellos que han sido beneficiados con vivienda gratuita para disminuir los riesgos generados por la relocalización residencial.

**Aún queda un gran camino por recorrer y eso nos motiva y obliga a seguir trabajando, no solo en este gobierno, sino en los que vienen, para que continúen en ese trabajo por la población más vulnerable.**

*Nemesio Roys.*

## Más que Transferencias y Unidos

Son grandes logros de los programas más conocidos, pero están lejos de ser el legado completo de estos años de Prosperidad Social. La energía de la entidad circula por dos subdirecciones generales de las que se desprenden las direcciones de los programas y sus grupos de trabajo. Lo complementan una decena de oficinas de apoyo y asesoras y 35 oficinas regionales. Es uno de los más sólidos brazos del Estado para llegar a todo el país, con un cuerpo administrativo eficiente. De hecho, el gobierno Santos dejó como legado una entidad con el 100 por ciento de sus cargos en carrera, asignados por meritocracia. Sus números y registros en inversión y transparencia son consecuencia y evidencia de ello.

No podría ser de otra manera: los recursos están destinados a responder a un imperativo moral. Con





esos recursos la entidad aportó a que 5,4 millones de colombianos superaran múltiples condiciones de la pobreza y a dejar líneas trazadas para que ese 17 por ciento de la población del país que todavía sufre dichas condiciones, pueda vencer la pobreza en los siguientes años.

El director Roys señala: “Debemos continuar generando capacidades, oportunidades para el emprendimiento, para que las familias monten sus propios negocios, para cultivar, para generar encadenamientos productivos que sean protagonistas de su propio desarrollo”.

“Capacidades, emprendimiento, negocios propios, cultivo y proyectos productivos”, parece una buena síntesis de las áreas hacia las que se despliegan los programas de Prosperidad Social, específicamente los que se ejecutan desde la Dirección de Inclusión productiva.

En materia de emprendimiento, por comenzar por alguna de las estrategias, se capitalizó y capacitó

a 276.835 personas. Hasta 2018 se invirtieron más de 300.000 millones de pesos. Los participantes están comprometidos durante 17 meses, desde la vinculación al programa, la formación en el plan de negocios, la aprobación de los cursos y la capitalización, hasta que pueden poner en marcha su iniciativa.

Esto se implementó sin renunciar a la posibilidad de facilitar el acceso de otros participantes al mercado laboral. En empleabilidad se trabaja para facilitar la inserción de la población que participa en estrategias de la entidad, mediante la formación técnica o complementaria, el fortalecimiento de sus competencias transversales, el acompañamiento psicosocial y el acceso a oportunidades de empleo que ofrezca el mercado laboral. A estos procesos se vincularon cerca de 163.653 personas que equivalen a una inversión de más de 200.000 millones de pesos.

## Mucho más: para la paz en el campo

El legado de Prosperidad durante estos ocho años recoge además otros elementos nucleares en la construcción de la paz duradera y estable, aquella -vale insistir- que está más allá de la ausencia de guerra. Sus programas, como se ha expuesto aquí, apuestan por el cierre de brechas entre la población rural y la urbana, de acuerdo con el concepto de la Misión para la Transformación del Campo. Y cuatro de esos programas tienen pleno énfasis en la ruralía: ReSA, Familias en su Tierra, Iraca y Familias Rurales.

No hay manera de aspirar a la justicia social en un país que no aborda la desigualdad del campo, mucho menos después de que el Gobierno se dio a la tarea de diagnosticar y revelar plenamente esa injusticia estructural tan usada para explicar el conflicto. Para Olga Lucía Acosta, “Los logros en materia del proceso de construcción de paz exigen trabajar en cerrar brechas con territorios rurales, que presentaron mayor afectación por la guerra”.

“Para continuar ese gran trabajo de superación de la pobreza, hay que desplazarse a la zona rural. Esta concentra tres veces más la pobreza que tenemos en la zona urbana. Y el posconflicto es lo que nos va a permitir llegar a estas zonas donde antes el Estado no llegaba”, expresa Roys.

Hasta aquí, medio millón de hogares rurales participaron en los programas de inclusión productiva con énfasis en la reconstrucción del campo colombiano y la garantía y reivindicación de derechos de la población rural. Su objetivo, expresado por Roys, es “llegar a esas familias que no han tenido antes la oportunidad de desarrollo y nunca han recibido ese apoyo. De esa forma Colombia puede seguir este gran camino en términos de superación de la pobreza”.

ReSa busca mejorar el acceso y el consumo de alimentos de la población pobre y vulnerable a través de la producción para el autoconsumo, la

promoción de hábitos alimentarios saludables y el uso de alimentos y productos locales. Tiene una versión rural y otra étnica, respondiendo al enfoque diferencial con el que se proyectan y aplican los programas la entidad. Durante el gobierno Santos acompañó a 388.000 familias, de 617 municipios del país. La inversión superó los 397.000 millones de pesos.





Familias en su Tierra ayudó a la estabilización socioeconómica de cerca de 76.000 hogares víctimas del desplazamiento que retornaron a sus tierras o se reubicaron en otros territorios. Lo hizo apoyando la producción de alimentos, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, el fortalecimiento social y comunitario y la creación o fortalecimiento de proyectos productivos. Para ello invirtió 322.000 millones de pesos. En esta misma publicación esos logros de este programa están expuestos en la historia de Breiner Ladino, cuya experiencia de reivindicación en la vereda El Cedral, en Quinchía (Risaralda), contiene lo que la estadística no alcanza a reflejar.

En Iraca, la inversión llegó a 46.000 millones de pesos. Y más importante, llegó a 38.000 hogares de pueblos indígenas y afrocolombianos en situación de pobreza extrema o vulnerables, en riesgo de desaparición física y cultural. El programa trabaja porque estos pueblos tengan acceso a alimentos a través de la implementación de huertas caseras, la promoción de la generación de ingresos a partir de la creación o fortalecimiento de proyectos productivos comunitarios y el fortalecimiento social de las comunidades.

Y Familias Rurales vinculó a 1,588 hogares. Aquí Prosperidad Social promovió el trabajo colectivo, el desarrollo empresarial, la creación de oportunidades para el acceso a mercados, el acompañamiento social y técnico a los hogares participantes, el fortalecimiento del tejido, el trabajo comunitario y el enfoque territorial.

## Espacios y vías para la paz y contra la pobreza

“No se trata sólo de poner ladrillos uno arriba de otro, sino ver cómo a través de esto se alimenta un proceso de autocrecimiento social y cultural. Porque no son actores externos los que les dicen a la población cómo crecer. Nosotros creamos condiciones para que la gente decida qué considera y cómo considera las mejorías, cómo utilizarlas”.

Quien habla es Nazario Esposito, director para Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés). Habla de la experiencia en los proyectos de mejoramiento de vivienda que esa organización realiza en llave y como operador de Prosperidad Social. Esa es una parte importante del trabajo de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.

Además de estos mejoramientos de vivienda, la entidad financia pequeñas y medianas obras civiles -vías urbanas, espacios públicos, espacios comunitarios y soluciones para agua potable y saneamiento básico- siempre que atiendan necesidades de los grupos más vulnerables. Cumple así con la generación de entornos saludables, seguros y dignos como parte de su estrategia de superación de la pobreza y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Y lo hace, como dice Esposito para su caso, respetando los requerimientos socioculturales de la gente que habitará o dará el sentido a la vivienda o al espacio colectivo. Así lo hizo en el resguardo de Arquía, en Unguía (Chocó), donde el pueblo indígena Gunadule vio repotenciados centros espaciales y espirituales con la intervención respetuosa pero necesaria de varios lugares esenciales para las prácticas culturales y su preservación. La importancia de esta intervención está en la voz de los representantes de este casi extinto pueblo indígena, en uno de los textos del capítulo siguiente. Los 800 pobladores de Arquía se suman a 18 millones de personas a los que estos programas han impactado.

Sólo en el año que termina este gobierno, quedaron 800 proyectos comprometidos y en ejecución, con costo cercano a 1,3 billones de pesos. Durante los ocho años la inversión ha sido de 4,25 billones de pesos, en más de 3.700 proyectos. Allí están incluidos 543 proyectos de infraestructura comunitaria, que representaron una inversión de 543.000 millones de pesos; 69 obras de saneamiento básico y agua potable, por 156.000 millones de pesos; y el mejoramiento de



vivienda a 80.000 familias, en lo que la entidad invirtió 415.000 millones de pesos. Tal como ha llegado al “lejano” Arquía, el programa ha llegado a 943 municipios de los 32 departamentos: más de 84 por ciento del territorio nacional.

Muchos de estos proyectos fueron posible gracias a alianzas, en las que se han sumado alrededor de 150 entidades y organizaciones del sector privado y la cooperación internacional.

## 2011-2018: lo sembrado y lo pendiente

Era 2011. El presidente Juan Manuel Santos sancionaba la Ley de Víctimas: “Asumimos nuestra responsabilidad como sociedad. Porque nos hemos propuesto que el sol de la prosperidad salga para todos, pero primero –antes que nada– salga para los más olvidados, para los más sufridos, para los inocentes que hasta hoy han cargado en soledad el peso de su dolor”. Asistían representantes de muchos países y de los organismos internacionales mientras Santos daba esta declaración de principios que bien se refleja ahora en el ejercicio del sector a través del cual el Estado “-en nombre de la sociedad– está dispuesto a pagar una deuda moral, una deuda largamente aplazada”.

Durante los primeros cuatro años del compromiso, la macroeconomía del país se ajustaba como guante al discurso ético. “En el primer periodo, el Gobierno transformó en políticas públicas y cambio social todo el *boom* de los *comodities* y la plata del petróleo”, comenta Roberto Angulo. Pero no había las mismas condiciones para el siguiente periodo, en el que los efectos de extendidas crisis de la economía mundial sobre el crecimiento nacional, ponían a prueba el imperativo ético: “En el segundo periodo, con dificultades de

crecimiento, igual se trabajó por la reducción de pobreza”, reconoce Angulo.

De hecho, Colombia superó las metas de reducción de pobreza multidimensional que trazó para 2018 en cumplimiento de los ODS: había proyectado 17,8 por ciento y la redujo a 17 por ciento un año antes del corte. La meta a 2030 es de 8,4 por ciento.

El esfuerzo se refleja también en la reducción de la desigualdad, hasta ahora una de las más altas del mundo, pero también una de las que más se ha reducido en Latinoamérica en los recientes años. La meta para 2018 es bajar el coeficiente de Gini a 0,52 y los resultados de 2017 ya mostraron que fue superada: el año pasado el coeficiente estaba en 0,508. La meta para 2030 es bajarlo a 0,48.

Con cada logro se abre un nuevo reto. El principal: la erradicación de la pobreza extrema, objetivo central en la visión de Prosperidad Social para 2025. En el fondo de esa visión late el imperativo moral. “No puede haber otro reto. Estamos hablando de las posibilidades de sobrevivir de la gente”, advierte Angulo, señalando las particularidades agregadas: “A medida que se reduce la pobreza extrema, que viene cayendo de forma casi sostenida durante los recientes años, se dispersa y se concentra en algunas regiones (Guajira y Chocó) y se hace cada vez más difícil erradicarla”.

Todavía 3,5 millones de personas están en la pobreza extrema. Las cifras, desafortunadamente, confirman el análisis porque ciertas zonas concentran la mayor población que le sufre. En La Guajira, Chocó y Norte de Santander los indicadores de pobreza y extrema pobreza no mejoran al mismo ritmo que en el resto de país y los porcentajes siguen estando muy por encima del promedio nacional. En cuanto a la pobreza

**Yo dije el 7 de agosto: a los pobres no les vamos a fallar, y creo que nos les hemos fallado.**

*Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia.*



multidimensional, regiones enteras como la Pacífica -excluyendo a Valle del Cauca- y la Caribe -pese a que ha sido la de mayor reducción-, siguen lejos de las metas y el promedio nacional. En todo el país, 8,3 millones de personas siguen en la pobreza multidimensional y 3,9 millones de ellas habitan en el campo.

“Persisten retos para enfrentar en algunas regiones la pobreza. A pesar de los avances en el diagnóstico y la caracterización de diferentes regiones, es necesario avanzar en diferentes estrategias para obtener mejores resultados”, señala Olga Lucía Acosta.

Además, como advierten Angulo y Luis Fernando Mejía, el país entra a tener una fuerte clase media e impone dos agendas que hay que atender. El Director del DNP ha insistido en que “por primera vez, el número de personas en la clase media es superior a la cantidad de personas en la pobreza, consolidando un número sustancial de hogares con mayores ingresos que seguirán dinamizando el crecimiento económico en los próximos años”. “Un hogar sale de la pobreza y llega a una zona vulnerable, donde está en riesgo de caer de nuevo en la pobreza. Existe una agenda para esa clase

media frágil. La política pública tiene que ir a la velocidad de ese cambio social”, dice Angulo.

El director Roys, por su parte, reconoce que “aún queda un gran camino por recorrer y eso nos motiva y obliga a seguir trabajando, no solo en este gobierno, sino en los que vienen, para que continúen en ese trabajo por la población más vulnerable”.


Es 2018. El director del DANE, Mauricio Perfetti, presenta los resultados de las mediciones de pobreza monetaria y pobreza multidimensional de 2017. Son los últimos resultados que recibe el gobierno de Juan Manuel Santos y sirven de evaluación estadística para las entidades que trabajan directamente en la lucha contra la pobreza, especialmente la que fue creada para encabezarla.

“La pobreza multidimensional nos da unos indicadores de dónde debemos concentrar los esfuerzos para que tenga más impacto en la reducción de la pobreza. Y eso es lo que hemos hecho. Y para eso creamos, inclusive, una institucionalidad. El Departamento de Prosperidad Social se creó, precisamente, para

administrar y recoger las diferentes entidades que tenían, de una u otra forma, responsabilidades sobre la lucha contra la pobreza para poder hacer una acción más articulada”, recuerda el Presidente.

El balance es contundente: 5,4 millones de personas superaron la pobreza durante estos ocho años. “Yo dije el 7 de agosto: a los pobres no les vamos a fallar, y creo que nos les hemos fallado”. Ahí quedan cambios sustanciales. El legado.



A photograph of a mural on a wall. The mural depicts a man's face in profile, looking to the right. The man has a beard and is wearing a hat. The mural is painted in shades of brown, tan, and black. In the background, there are green trees and a blue sky with some clouds. A satellite dish is visible on the right side of the wall. The text is overlaid on a semi-transparent blue rectangular area in the center of the image.

# Centro Nacional de Memoria Histórica: historias para transformar el país

En 2011 el Gobierno Colombiano promulgó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448). Con esta decisión, por primera vez en más de medio siglo de conflicto armado en el país, las víctimas empezaron a ser reconocidas en la esfera pública como sujetos de reparación integral y atención especial por parte de la sociedad y el Estado.

Con esta ley se ordenó la creación de la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), este último con el fin de recuperar las memorias de las víctimas e incluirlas dentro de los relatos del conflicto armado colombiano, apoyar sus iniciativas culturales y académicas, salvaguardar los documentos, testimonios, objetos y expresiones que dan fe de su tragedia y de su resistencia. La ley le encomendó al CNMH llevar a cabo esta labor mediante la reconstrucción, conservación, difusión y comprensión de las memorias plurales del conflicto armado.

Sin embargo, el origen del CNMH se cimienta en el Grupo de Memoria Histórica, que nació con la Comisión Nacional de Reparación, en 2007. Es por eso que, desde esa época como Grupo, y ahora como entidad, ha realizado investigaciones haciendo énfasis en las experiencias de la población victimizada con el objetivo de reconstruir la memoria del conflicto armado colombiano. Estas investigaciones giran alrededor de las causalidades -explicar y comprender-, modalidades y actores -magnitud del horror-, e impactos y daños con enfoque diferencial.

La entidad trabaja con diferentes temáticas para avanzar en la comprensión de los impactos y

dimensión de la guerra, y las voces de resistencia: tierras, organización social y territorio; derecho a la justicia como garantía de no repetición, experiencias de las comunidades de las escuelas, los periodistas y medios colombianos; el poder local en medio del conflicto armado, la criminalización de la actividad política, los daños de la violencia en la niñez y la juventud; el caso de Buenaventura, entre otros. Con el fin de garantizar la inclusión y la pluralidad de voces, el CNMH trabaja además con distintos enfoques: el étnico, el de género, de discapacidad, de adultos mayores, y el de niños, niñas y adolescentes.

**La memoria se revelaba como un ejercicio de vida o sobrevivencia a la muerte, aun en los escenarios más adversos, que sigue sus propios tiempos, utiliza diferentes mecanismos y guarda sus propios silencios.**

*Gonzalo Sánchez, director del CNMH*

El trabajo del CNMH no termina allí. A la fecha la entidad ha logrado divulgar más de 116 publicaciones entre investigaciones e informes que dan cuenta de esos horrores, resistencias e historias de vida. Dichas investigaciones han sido puestas a disposición de las víctimas y las organizaciones sociales, los investigadores, las Organizaciones No Gubernamentales, los organismos de cooperación y la comunidad en general, mediante actividades pedagógicas, exposiciones y a través de los medios de difusión que tiene la entidad: la página web, la revista Conmemora y Conmemora Radio. Gracias a este esfuerzo ha logrado contribuir, con

las demás entidades públicas y privadas con responsabilidades en la materia, a impulsar la iniciativa de articular una red latinoamericana para proteger y divulgar las memorias de los conflictos y de los regímenes autoritarios, como también para diseñar estrategias pedagógicas y de comunicación social con el propósito de contribuir a las garantías de no repetición.



## ¡Basta Ya!

El CNMH también continúa en la recuperación, recepción, conservación, compilación y análisis de todo el material documental, testimonios orales, escritos y demás, relativos a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano, a través de la realización de investigaciones, actividades museísticas, pedagógicas, acciones conmemorativas, etc., que contribuyen a establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos, conocer la verdad y contribuir a evitar la repetición de los hechos.

El informe *¡Basta ya!: Memorias de guerra y dignidad* es un ejemplo de ello. Este fue entregado a un grupo de víctimas, al presidente Juan Manuel Santos y puesto a disposición del público, en julio de 2013. Desde entonces se ha convertido en un insumo para conocer el conflicto armado en cuatro de sus dimensiones: qué pasó, por qué pasó, a quién le pasó y qué debemos hacer para que no se repita. Este informe, como todas las publicaciones del CNMH, es de acceso público y gratuito. Ha sido consultado en más de 1.795 bibliotecas y centros culturales del país, además de estar disponible en la página web <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co>. A la fecha se han realizado 431.169 descargas para la consulta de los informes del CNMH.

Aunado al importante impacto que ha tenido la entidad en la esfera pública, los recientes acuerdos de paz han puesto en el centro de la reflexión los temas de verdad, memoria y justicia: una oportunidad para repensar el sentido del acumulado del Centro Nacional de Memoria Histórica en términos de balance y legado.

Para Gonzalo Sánchez, director del CNMH, “la vigencia de la memoria no se agota en las lógicas bélicas ni en las lógicas políticas, aunque sea constreñida por ambas. De hecho, cuando inició el trabajo del Grupo de Memoria Histórica, pese a la insistencia de algunos en que no se podía hacer memoria en medio del conflicto, y pese

a la negación gubernamental, en ese entonces, de la existencia de un conflicto armado interno, pudimos constatar que eran muchas las iniciativas individuales y comunitarias que daban cuenta de la guerra. Eran cientos quienes llevaban una bitácora de su sufrimiento o habían plasmado una huella, conservado un documento, erigido un monumento, en un esfuerzo de resistencia o de denuncia. La memoria se revelaba como un ejercicio de vida o sobrevivencia a la muerte, aun en los escenarios más adversos, que sigue sus propios tiempos, utiliza diferentes mecanismos y guarda sus propios silencios”.

El camino no ha sido fácil. La búsqueda de testimonios que remueven las fibras más sensibles, la recuperación de la confianza de las víctimas en la institucionalidad, la construcción de la memoria en medio del conflicto armado, han sido obstáculos a los que el CNMH se ha enfrentado.

Por eso, en 2014, como una respuesta institucional que se adapta a la manera como las organizaciones han venido construyendo la memoria desde décadas antes de que el CNMH acompañara los actos de reconocimiento en el territorio nacional, nació el proyecto de Agenda Conmemorativa. Con ella se han apoyado conmemoraciones y fortalecido procesos de *vieja data*, que se han mantenido en el tiempo liderados por organizaciones que los iniciaron sin apoyo del Estado. Ejemplos de ellas son las evocaciones en homenaje a las víctimas de desaparición forzada -Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y Semana de los Detenidos Desaparecidos-, la masacre de Bojayá en Chocó, Orión Nunca Más en Medellín, Antioquia, el Día de la Memoria y la Dignidad Campesina en La Moralia, Valle del Cauca y el Día Nacional de los Derechos Humanos en Pasto.

Todos estos actos involucran a distintos sectores de la población, entre organizaciones de víctimas, colectivos artísticos e instituciones públicas y privadas. El trabajo conjunto facilita la construcción de espacios comunes que permiten expresiones de solidaridad y resistencia, transforman la manera de



crear las conmemoraciones. Se restablecen lazos sociales y comunitarios que se vieron desgarrados por el conflicto armado colombiano; se reconoce que la unión favorece el intercambio de saberes, experiencias, metodologías, herramientas, y formas de trabajo que estimulan el crecimiento de las actividades de este tipo en las poblaciones.

Desde su creación, la Agenda ha apoyado 75 conmemoraciones en 20 departamentos y 40 ciudades, municipios y corregimientos, con la participación de más de 10.500 personas que han acompañado a las víctimas en la exigencia de su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Además, ha promovido, a partir de diferentes encuentros, la construcción de redes entre más de 100 organizaciones sociales.

El trabajo del CNMH ha permitido que la memoria pueda operar entonces como un instrumento eficaz de reconstrucción del tejido social, de renovación de solidaridades y de dignificación de experiencias individuales en la esfera pública. “La memoria se convirtió en un espacio de articulación de lo que la guerra ha fragmentado”, explica Gonzalo Sánchez.

## Política Pública de Archivo de Derechos Humanos

La creación de la Política Pública de Archivos de Derechos Humanos, Memoria Histórica y Conflicto Armado es uno de los grandes logros que el CNMH ha promovido desde 2013. Fue construida con 832 organizaciones sociales y de víctimas, y 208 personas de 150 instituciones públicas en seis regiones del país. Tiene como objetivo precisar lineamientos y componentes, mediante la aplicación de principios y estándares internacionales, normas y medidas, que conduzcan a la protección, conformación, apropiación y uso social de los archivos de derechos humanos.

El Centro también ha avanzado en la consolidación del Archivo Nacional de Derechos Humanos

y Memoria Histórica mediante el acopio de documentos ofrecidos por personas naturales, organizaciones sociales e instituciones, entre otras fuentes. En esa línea de trabajo ha aportado a la reconstrucción de la memoria y al derecho a la verdad, 313.745 documentos de archivo recopilados y puestos al servicio de la sociedad y 1.812 archivos de derechos humanos y memoria histórica, que han sido identificados, localizados e incorporados al Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos (READH) de organizaciones sociales, víctimas, grupos étnicos y personas naturales. Todos ellos disponibles para consulta.

Entre los registros también se encuentran los archivos base de las investigaciones publicadas por el CNMH desde 2007, documentación donada por líderes y organizaciones sociales, artículos de prensa, libros, fotografías, cartas, videos y discos compactos, catalogados y clasificados bajo normas internacionales.

Una muestra de este trabajo es el registro de archivos realizado al suroccidente del país. Los departamentos de Nariño, Putumayo y Cauca son territorios topográficamente complicados; la falta de vías de acceso y la difícil situación de seguridad en esta región han dificultado su cobertura por parte de diferentes instancias e iniciativas. Sin embargo, el equipo regional suroccidente del READH se propuso desde 2015 llegar a los lugares más recónditos.

“Uno de los archivos que más resalto de mi trabajo es el del profesor de artes y diseño gráfico, Juan Carlos Conto Díaz del Castillo, historiador con inclinación por las artes visuales. Desde la toma del Palacio de Justicia inició un archivo conformado por recortes de periódicos, libros, fotografías, y varios documentos que van reconstruyendo la historia de la violencia en Colombia. A partir de esto, formó un grupo de investigación en la Universidad de Nariño, donde se propone, por iniciativa del profesorado y los estudiantes, la construcción de un museo ‘vivo’ de memoria donde reposen las cosas; que la gente sea la que



vaya a investigar la verdad y proponga su verdad. Este es un profesor que ya tiene bastantes años y que decía que su esposa lo miraba como un acumulador compulsivo porque no entendía la importancia de esto. Me dijo: ‘No pensé que en un momento como este, cuando yo ya estoy lleno de canas, (el archivo) podría servir y tener un uso social’. Es una de esas historias que te inspiran y te hacen pensar que vale la pena hacer lo que hacemos. Actualmente son casi 38 metros lineales de información que aún están en proceso, así que estamos intentando darle un nombre.” dice Karen Pérez del CNMH.

Y es que, tras largos años de guerra, el país se encuentra frente al desafío de consolidar un ambiente social y unas instituciones públicas que garanticen el tránsito hacia nuevos tiempos en los que la violencia sea desterrada, la ciudadanía pueda ejercer libremente sus derechos y las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, y de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), sean reconocidas plenamente.

## Enfoque diferencial

Una de las funciones del CNMH, en los temas de memoria histórica, es servir como plataforma de apoyo, gestión, intercambio y difusión de iniciativas locales, regionales y nacionales, promoviendo, con enfoque diferencial, la participación de las víctimas. Para garantizar una reparación integral a las víctimas y su derecho de la memoria, el Centro ha desplegado su actividad teniendo en cuenta el enfoque étnico, de género, de niños, niñas y adolescentes, de discapacidad y adultos mayores. El primero señala la ruta de atención para los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y comunidades Rom. El grupo del CNMH responsable de esta atención aborda la memoria de poblaciones étnicas para la reconstrucción histórica de hechos relacionados con el conflicto armado colombiano, reconoce sus dispositivos culturales en pro de la reconstrucción de los tejidos sociales y define pedagogías orientadas para que no se repitan los hechos victimizantes.



Los pueblos étnicos son poseedores de complejos dispositivos de memoria. Muchos tienen maneras particulares de interpretar el pasado y hacen uso de herramientas propias para la comprensión de su historia y de los diferentes actores involucrados en ella. El CNMH ha desarrollado proyectos y acciones con enfoque diferencial étnico con el pueblo indígena wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, el pueblo indígena awá de Nariño y Putumayo; el pueblo indígena arhuaco de Cesar, los pueblos indígenas de Amazonas; con el Consejo Comunitario Jacobo Pérez Escobar -diáspora palenquera en Aracataca, Magdalena; y con los Consejos Comunitarios de Tanguí y Pogue, de Medio Atrato, Chocó, entre otros.

Por otra parte, el enfoque de género ha permitido evidenciar que en el conflicto armado, la desigualdad entre géneros ha producido repertorios de violencia específicos, daños diferenciados y formas de resistencia particulares. No es igual ser mujer que hombre en medio de la guerra, mucho menos asumir una identidad de género diferente. Reconstruir memorias con este enfoque significa garantizar la participación equitativa de hombres, mujeres y otras identidades, mientras se transforman los imaginarios maniqueos y estereotipos segregadores. El CNMH busca comprender cómo las desigualdades de género han sido uno de los engranajes que sostienen la guerra en Colombia.

Algunos de los informes que se destacan en este enfoque son: *La masacre de Bahía Portete, mujeres wayuu en la mira*; *Mujeres que hacen historia*; *Mujeres y guerra*; *Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano*; *El Placer. Mujeres, coca y guerra en el Bajo Putumayo*; y el informe nacional de violencia sexual *La Guerra inscrita en el cuerpo*. Este informe contribuye a la comprensión de las formas en que la guerra se ha inscrito en los cuerpos de las víctimas de violencia sexual, proponiendo la construcción de una memoria ineludible: la de las violencias que han sido silenciadas por una sociedad que en no pocos casos ha elevado un manto de señalamiento, vergüenza y culpa





sobre las víctimas. Los testimonios de dolor y sufrimiento recogidos en este informe constituyen una apuesta política desde la dignidad de las víctimas de violencia sexual que le preguntan al país: ¿qué vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder?

Por otra parte, el enfoque de género del CNMH ha desarrollado acciones específicas con víctimas de sectores LGBT con el fin de avanzar en la comprensión de las violencias, afectaciones y resistencias experimentadas en el marco del conflicto armado en Colombia. Resultado de ello es el informe *Aniquilar la diferencia*.

“Este es un informe de memoria histórica que muestra cómo hubo y sigue habiendo en los territorios algunas personas que han sido atacadas, violentadas, desplazadas por su orientación sexual o su identidad de género. Una violencia que se ha ejercido contra personas por ser gays, por ser lesbianas, por esa diferencia que los actores armados identifican y que las convierten en foco de la guerra”, expresa Nancy Prada, relatora del informe.

Asimismo, el enfoque de niñas, niños y adolescentes se creó con la finalidad de propiciar la participación efectiva de estas personas en procesos y acciones de memoria histórica, así como la inclusión de sus experiencias en contextos de conflicto armado para que sus voces hagan parte de la memoria histórica de Colombia, como aporte al derecho a la verdad, a la reparación simbólica y a las garantías de no repetición. Esto ha conllevado que las instituciones públicas identifiquen posibilidades para que sus políticas públicas se implementen en virtud del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y de la protección integral en respuesta a sus situaciones y visiones del mundo,

**La memoria se convirtió en un espacio de articulación de lo que la guerra ha fragmentado.**

*Gonzalo Sánchez.*

de acuerdo con sus identidades culturales y su proceso de desarrollo.

Para ello, desde 2015 el CNMH cuenta con un equipo que desarrolla tres caminos para la inclusión de las experiencias de los niños, niñas y adolescentes:

- Inclusión de quienes hoy son niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado o habitan en contextos afectados por el conflicto armado, en perspectiva de dignificación.
- Inclusión de quienes fueron víctimas siendo niños y hoy ya son personas jóvenes o adultas, en perspectiva de reconocimiento.
- Conexión de la experiencia de niños, niñas y adolescentes en contextos de conflicto armado con otros que habitan entornos percibidos como distantes del conflicto armado en perspectiva de promover la comprensión empática y la solidaridad con las víctimas.

Uno de los grandes resultados de este enfoque es el informe nacional de reclutamiento y utilización

de niños, niñas y adolescentes *Una guerra sin edad*, cuyo objetivo principal es contribuir al esclarecimiento de dinámicas y tendencias históricas del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en el marco del conflicto colombiano.

Esta publicación es el resultado de un proceso de investigación del Centro que empezó en 2015 y cuya metodología permitió que el informe refleje voces provenientes de memorias sociales, relatos y estudios cuantitativos realizados por instituciones del Estado, así como la base de datos de nuestro Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC). Las guerrillas han sido el mayor



reclutador con 8.701, el 69 por ciento de los casos. Los grupos paramilitares son responsables del 24 por ciento con 2.960; los grupos armados post-desmovilización son responsables de 839 casos que corresponden al 7 por ciento, y la Fuerza Pública presenta tres casos.

Por último, el cuarto enfoque, de discapacidad y adultos mayores, ha tenido como objetivo principal influir transversalmente en todos los equipos de trabajo del CNMH para consolidar una institución sensible con las personas en situación de discapacidad y más comprensiva de las condiciones particulares de las personas mayores y en discapacidad, y de los entornos discriminatorios. Este enfoque permite realizar acciones específicas para garantizar la participación efectiva de todas las víctimas, a través de distintos abordajes metodológicos y conceptuales.

Los principales públicos con los que se relaciona este componente son sobrevivientes de minas antipersonal y remanentes de explosivos de guerra, al igual que líderes de organizaciones de víctimas y organizaciones sociales que trabajan por las personas con discapacidad. Entre estos se destacan el Instituto Nacional para Ciegos,

la Campaña Colombiana Contra las Minas y la Fundación Saldarriaga Concha.

En escenarios de conflicto armado es frecuente la exclusión a personas en situación de discapacidad, adultos mayores o personas con deficiencia, enfermedad o incapacidad. Ellas viven los hechos victimizantes de una manera diferente. Sus entornos de seguridad -comunidad, familiares y cuidadores/as- se transforman radicalmente. Una de las problemáticas humanitarias más graves de Colombia son las minas antipersonal, las municiones sin explotar y los artefactos explosivos improvisados que han dejado discapacidades nuevas en personas y comunidades que antes no las vivían. El CNMH los ha hecho partícipes de procesos en condiciones de igualdad, identificando sus afectaciones y resistencias particulares. Con este trabajo se logró construir una colección en PDF de libros hablados y el *¡Basta Ya!* en braille, además de la publicación *Esa mina llevaba mi nombre*, que destaca las historias de integrantes de la Fuerza Pública afectados por dichos artefactos; una clara violación al DIH.

En este mismo campo se han realizado también dos importantes publicaciones. En primer lugar, *Ojalá*

*nos alcance la vida*, iniciativa de memoria realizada por el enfoque diferencial de discapacidad del CNMH y Corporación de Asuntos Mayores (Coasuma), que reúne 15 historias escritas por periodistas de diferentes partes del país, acerca de personas mayores que han tenido que padecer de alguna u otra forma el conflicto armado. Y en segundo lugar se publicó el informe *La guerra escondida: Minas antipersonal y remanentes explosivos en Colombia*. Este informe centra su análisis en el uso de las minas antipersonal de fabricación improvisada por parte de las guerrillas y sus daños consecuentes. Aunque la Fuerza Pública de Colombia empleó minas antipersonal industriales hasta que entró en vigor en Colombia el Tratado de Ottawa -el 1 de marzo de 2001- las 30 bases militares en donde existían campos minados fueron despejadas a través de desminado humanitario entre 2004 y 2010.

Gonzalo Sánchez explica que en virtud del marco normativo de la protección integral vigente y en cumplimiento del principio de enfoque diferencial de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, “el CNMH ha hecho de la pluralidad una característica indisoluble del ejercicio de memoria. Ella es lugar de encuentro, de tensiones y de negociaciones. Pero el reconocimiento de la pluralidad no supone equiparar o relativizar las memorias, ni convertirse en simple caja de resonancia de las distintas versiones. Los derechos humanos instauran raseros mínimos contra los que se confrontan las memorias de todos los actores del conflicto armado, porque la memoria es ante todo un espacio de esclarecimiento y reflexión sobre las condiciones y acciones que dieron lugar y alimentaron nuestra guerra. El CNMH ha tenido desde sus inicios como norte una opción preferencial por reconocer y

amplificar las voces de las víctimas, en un contexto de relaciones asimétricas y de desiguales accesos a la justicia, a los medios de comunicación y en general a los recursos del poder”.

Otro punto importante para el desarrollo de la misión institucional ha sido el trabajo con las entidades territoriales. Por ello, mediante la Estrategia de Nación Territorio, el CNMH ha asistido a estas entidades y las ha motivado para avanzar en la reparación simbólica de las víctimas de acuerdo con sus competencias y planes de desarrollo. En ese sentido se ha logrado un convenio de cooperación con la Federación Colombiana de Municipios que acompaña procesos con autoridades territoriales en Nariño, Antioquia, Valle, Cúcuta y Meta. Estos convenios están orientados a desarrollar acciones de formación en reconstrucción de memoria histórica, brindar asesoría sobre el tratamiento de los archivos de derechos humanos y la definición de lugares de memoria.

Para el desarrollo de dichas acciones, el CNMH cuenta con una metodología de asistencia técnica a entidades territoriales y una cartilla pedagógica que facilita la comprensión de conceptos académicos, institucionales y normativos relacionados con la memoria histórica en Colombia.

**No pensé que en un momento como este, cuando yo ya estoy lleno de canas, (el archivo) podría servir y tener un uso social.**

*Juan Carlos Conto Díaz, historiador.*

## El observatorio

El observatorio ha sido un esfuerzo misional de la entidad para lograr el esclarecimiento histórico de los hechos victimizantes del conflicto armado, identificando sus dimensiones, sus modalidades, sus víctimas y sus responsables, mediante el acopio, procesamiento y difusión de los casos





documentados de violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH que han tenido lugar en el país. La información proviene de fuentes oficiales, académicas, ONG, víctimas, desmovilizados y ciudadanía en general. Con este trabajo el CNMH busca la realización del derecho a la verdad de las víctimas y sociedad en su conjunto, pero también al cumplimiento del deber de memoria del Estado.

Los datos recopilados por este observatorio son patrimonio público, por lo tanto pueden ser consultados de manera libre y abierta a través de un micrositio albergado en la página web del CNMH que ha facilitado la recepción de otros casos, datos e información ofrecida por cualquier ciudadano. Los hallazgos y análisis procesados por el observatorio también serán puestos a disposición de la opinión pública mediante boletines periódicos.

## Respuesta judicial y reparación colectiva

Como parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Centro también contribuye a la reparación integral a través de la formulación y coordinación de las medidas simbólicas en procesos de reparación colectiva. Para dicha tarea ha avanzado en dos rutas: 1) Oferta

de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 2) Demanda de las comunidades o grupos sujetos de reparación. El Centro ha contribuido en la etapa de diagnóstico de daños para los casos de: La Pola (Chibolo, Magdalena), Palizua (Chibolo, Magdalena), San Luis, vereda Buenos Aires, Granada y San Francisco (Antioquia) y El Placer (Putumayo). Igualmente, ha apoyado la implementación de algunas medidas de reparación simbólica en los casos de: la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (Santander), El Salado (Bolívar), la Universidad de Córdoba, El Tigre (Putumayo), la Organización Femenina Popular y San Carlos (Antioquia).

En suma, la tarea del grupo consiste en fortalecer los lazos esenciales entre memoria y reparación, de modo que estas acciones permitan articular el sentido de la reparación en un horizonte más amplio y plural, y que a su vez las acciones se conviertan en una oportunidad para que la memoria contribuya en la construcción de condiciones ciertas para la paz en los territorios.

## Acuerdos de la verdad

El CNMH ha jugado un papel fundamental en la recepción, clasificación, sistematización, análisis y preservación de los testimonios de más

de 15.000 desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que firmaron los acuerdos de la Verdad con el Gobierno Nacional, en el marco de la aplicación de la Ley 1424 de 2010: hombres y mujeres ex paramilitares, que no están comprometidos en delitos graves y han seguido el proceso de reintegración a la vida civil sin reincidir en la delincuencia. A través de la Dirección de Acuerdos de la Verdad se ha certificado la contribución de estos desmovilizados -efectiva o no- a la verdad, y se han elaborado informes, que han sido entregados a la sociedad, para ayudar al entendimiento de las causas, circunstancias y consecuencias de las situaciones más graves de violencia que han tenido lugar durante el conflicto armado colombiano.

Los aportes testimoniales de los desmovilizados se refieren a temas como la conformación de los grupos paramilitares, su participación y el conocimiento de causa que tengan de hechos y actuaciones del grupo armado al que pertenecían. Esta información contribuye a garantizar la verdad histórica del conflicto. Los desmovilizados que participan en este ejercicio cuentan con todas las garantías de confianza en este pacto, teniendo claro que no es un escenario judicial y que les permitirá avanzar en su reintegración a la vida civil y resolver su situación jurídica para que gocen de libertad.

Por último, todo el trabajo que el CNMH ha desarrollado como entidad se verá reflejado en la construcción del Museo de Memoria Histórica de Colombia. Este lugar de memoria es un avance en el deber del Estado que redundará en la garantía del derecho de la sociedad colombiana a la construcción permanente de la memoria y la paz; se constituye en sí mismo en una de las medidas de reparación y de satisfacción para las víctimas del conflicto armado en el país.

Con este marco legal el Estado responde a la exigencia de distintos sectores de la sociedad, especialmente de organizaciones de víctimas y de derechos humanos, sobre la necesidad de

implementar políticas de la memoria para el esclarecimiento, la comprensión de la verdad sobre el conflicto armado, la dignificación de las víctimas y la construcción de garantías de no repetición.

La importancia de este museo radica además en la necesidad de visibilizar la magnitud de la tragedia vivida durante décadas de confrontación bélica, y para reconocer, reflexionar y debatir sobre las causas y condiciones que desencadenaron el conflicto armado, lo degradaron y lo prolongan en la actualidad. Será un lugar para que el país pueda encontrar claves para leer críticamente su pasado y para que construya las condiciones de un nuevo porvenir.

Al mismo tiempo, en este lugar se reconocerán y fortalecerán espacios e iniciativas de memoria que se construyen en todo el país, portadoras de sueños por un buen vivir. Más que ser un museo en la capital del país, pretende ser un espacio que articula, pone en diálogo y visibiliza el trabajo innovador y creativo de memoria de las diversas regiones y poblaciones de Colombia.

Durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2018, el CNMH dedicó un pabellón a la exposición *Voces para transformar a Colombia*. Esta ha sido la primera vez que un museo de la memoria en el mundo expone su guion al público antes de abrir sus puertas de manera definitiva. Más de 75.000 personas que visitaron la exposición escucharon las voces de las víctimas, con tres metáforas como eje: agua, cuerpo y tierra. A través de ellas se contaron historias sorprendentes, inspiradoras, dolorosas.

Al agua han arrojado cadáveres, la han contaminado, secado y desviado. El cuerpo ha sido lacerado sin piedad hasta desaparecerlo, y aun así ha resistido con dignidad. Y la tierra es el motor de la guerra, su riqueza hace que todos la quieran, de ella se han desplazado y a ella han regresado.

En esta exposición se mostró la historia del

soldado que perdió sus piernas desactivando una mina antipersonal y en lugar de sucumbir decidió convertirse en medallista paralímpico. También estuvo el relato de las mujeres de la Organización Femenina Popular, un ejemplo de resistencia llena de símbolos e imaginación en el Magdalena Medio. O la de los indígenas wiwa de la Sierra Nevada, que padecieron el desequilibrio espiritual de su territorio cuando los grupos armados lo convirtieron en corredor estratégico y lo mancharon de sangre.

Los protagonistas de esas historias le dieron vida a la exposición. Vinieron desde sus regiones para recorrerla, dialogar y participar en una programación artística, cultural y académica que contó con más de 100 eventos. *Voces para transformar a Colombia* es un relato de la guerra, donde los personajes son muchos, las responsabilidades han sido minimizadas, las causas son complejas y las versiones se oponen. Los museos no acostumbran a revelar su guion antes de abrir las puertas, pero el Museo de Memoria Histórica de Colombia creyó en el valor de este espacio para escuchar, discutir y proponer antes de inaugurar su edificio en la calle 26 con avenida Las Américas, en el 2020.

Así el CNMH ha logrado un aporte a la paz, la reconciliación, la verdad, la dignificación de las víctimas como sujetos de derecho. Como dice Gonzalo Sánchez, los trabajos de memoria no son ajenos a las dinámicas generales del Estado y la sociedad sino que las adaptan o potencian. En un país plagado de exclusiones y con limitados accesos de diversos sectores sociales a los recursos económicos, al poder y a la participación social y política, el reconocimiento a la memoria y a la condición de víctimas es un mecanismo de recuperación y ampliación de derechos y del ejercicio ciudadano. Las comunidades de duelo se transforman en comunidades de ciudadanos y de derechos. Por eso la memoria seguirá siendo una aliada para la consolidación de la paz.



A man wearing a wide-brimmed hat with black and white stripes, a white button-down shirt, and blue jeans is walking through a field of green plants. A colorful woven shawl is draped over his left shoulder. The background is filled with lush greenery and trees.

# El legado de la Unidad para las Víctimas





La labor de recuperar un país que se encuentra en cuidados intensivos por la irracionalidad de las armas, por la insensatez de unos cuantos corazones que prefieren latir a 72 balas por minuto y que han querido extender una mortaja sobre este territorio de acordeones, arpas, triples y bongós, no es para nada fácil.

Son muchos los resposos que se han entonado en décadas de conflicto en un país que ha acumulado durante más de medio siglo tristezas y olvidos. Son más de 8 millones de personas que cuando se miran a un espejo no ven a un hombre o una mujer o un campesino o una etnia, ven un dolor.

Son más de 8 millones de almas colombianas pendientes de que les den una mano, para barrer para siempre las esquirlas de un recuerdo o de la desesperanza.

Así es, tristemente, Colombia es un país de víctimas, y partiendo de esa certeza, el Gobierno Nacional tuvo a bien reconocer la existencia del conflicto armado y los impactos que ha generado en la población. Por eso, trabajó fuertemente en la presentación del proyecto de ley que radicó ante el Congreso de la República y que se convirtió posteriormente en la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). Es la descripción de cómo el Gobierno buscaba saldar una deuda con los sobrevivientes del conflicto y poner en el escaparate el sufrimiento de casi la quinta parte de la población del país.

*No seremos los mismos después de tanta sangre, después de tantas lágrimas, de tanto sufrimiento.*

*No seremos iguales después de recorrer –con el alma encogida por el pesar y el miedo– décadas de violencia entre hijos de una misma nación.*

*Una violencia absurda e insensata, como toda violencia.*

*No será la misma Colombia la que se levante –digna, erguida, valiente, con cicatrices, pero hermosa– después de la noche infame del terror.*

*No. ¡No seremos los mismos!*

*Hemos sufrido mucho, hemos llorado mucho; hemos sentido el golpe de la mano asesina, el dolor de las viudas y los huérfanos, el desamparo de los despojados, y tenemos el reto, la obligación, el anhelo, de sacudirnos las cenizas y continuar el viaje.*

*¡Y vamos a hacerlo, colombianos! ¡Podemos hacerlo!*

Estas fueron las palabras del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, cuando sancionó la Ley de Víctimas, el 10 de junio de 2011, en presencia del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon. Dio luz verde a lo que él mismo llamó en ese discurso “un instrumento de paz y de justicia”, en un momento en que las cifras determinaban más de 3 millones de desplazados y medio millón más de personas afectadas por otros hechos victimizantes.

Ese mismo día, el Secretario General de la ONU recalcó que una buena ley no es suficiente, y que la Ley 1448 debía tener un efecto transformador en la vida de las víctimas.

Así, con un enfoque transformador, esta medida comenzó a ser la luz al final del túnel, para que miles de afectados por la violencia armada ilegal comenzaran a caminar, y convirtió a Colombia en el primer país en el mundo que comenzó a reparar víctimas sin finalizar el conflicto.

## **Nace la institucionalidad para atender a las víctimas**

Para avanzar en ello, una vez proferida la Ley, se creó una institucionalidad que abarca la

atención en todos los componentes sustanciales para el restablecimiento integral de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Esta institucionalidad es liderada por la Unidad para las Víctimas, entidad que forma parte del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación que encabeza el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, pero del que también hacen parte todos los sectores del Ejecutivo, en cabeza de 39 entidades, y las instituciones locales como responsables también de la atención en el territorio de las víctimas que allí se localizan.

**Tenemos el reto, la obligación, el anhelo, de sacudirnos las cenizas y continuar el viaje. ¡Y vamos a hacerlo, colombianos! ¡Podemos hacerlo!**

*Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia.*

Con la Unidad para las Víctimas, la Ley comenzó a remontar ríos, a cruzar por veredas, corregimientos, pueblos y municipios. Ya son más de 8 millones de víctimas las que están reconocidas. Las estadísticas, basadas en sus declaraciones al momento de registrarse, revelan que los hechos victimizantes que más han infligido dolor son el desplazamiento forzado, el homicidio y la amenaza.

El “memorial de agravios” lo completan el abandono o despojo forzado de tierras, el confinamiento, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, la desaparición forzada, las lesiones personales físicas y psicológicas, la pérdida de bienes muebles o inmuebles, el secuestro, la tortura, las minas antipersonas, los actos terroristas, los atentados, los combates y los hostigamientos y la vinculación de niñas, niños y adolescentes al conflicto.

Para el restablecimiento integral de derechos y teniendo en cuenta que las heridas del alma no se curan simplemente con un cheque al portador de una tragedia, los planes de reparación buscaron desde un principio ir más allá de la entrega de una





suma de dinero. Para ello fue creado un modelo de atención, asistencia y reparación que conllevaba esquemas de acompañamiento, programas de recuperación emocional y fortalecimiento social, cuya finalidad consistió en construir, conjuntamente con las víctimas, sus planes de reparación con medidas diferenciadas para cada una de ellas, acorde a las necesidades en medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, no repetición e indemnización administrativa.

Estos planes han permitido identificar las carencias y las capacidades de las víctimas, ofreciendo claramente un panorama del estado actual de las mismas, que ha posibilitado articular la oferta en cuanto a programas de formación profesional o técnica, vivienda y emprendimiento, entre otros.

Actualmente, 460.000 víctimas de desplazamiento forzado han superado su condición de

vulnerabilidad en los derechos de identificación, salud, educación, vivienda, generación de ingresos y reunificación familiar. Además, 65.000 hogares desplazados han participado en programas de acompañamiento al retorno y la reubicación.

Todos estos procesos son en realidad estrategias de recuperación humanitaria, las cuales son fundamentales para que las víctimas puedan avanzar en su proceso de reparación, porque esas estrategias les dan a ellos herramientas para seguir adelante; no solo restablecen los derechos desde la parte material sino que se construyen desde el ser. A nivel individual hablamos de alcanzar la reconstrucción emocional, como es el caso de las víctimas de violencia sexual.

De mujeres que fueron víctimas de la violencia sexual subrayamos declaraciones como esta:

“La reparación integral de las víctimas en las mujeres, para mí fue de gran bendición. Resulta que cuando llegué había 25 mujeres, y empezar a escuchar a cada una, cosas similares a las que yo he vivido, o peores, darles a conocer también lo que había vivido, empieza a llenarlo a uno de fortaleza”.

En esta materia se han atendido a más de 700.000 víctimas en su recuperación emocional y psicosocial, contando entre ellas adultos, niños y niñas, adolescentes y jóvenes, víctimas de violencia sexual.

A nivel colectivo hablamos de resucitar los hábitos y costumbres de las comunidades, y de respetar la cosmovisión de algunas etnias. Por eso, muchas veces esas estrategias van de la mano de procesos de retorno y reparación.

“Decidimos volver porque esta es la tierra de uno, esto es donde uno siempre ha vivido toda la vida, y que más que donde uno se ha criado, donde tiene sus costumbres, tiene su familia. ¡Qué mejor que llegar a la tierra donde uno siempre ha trabajado!”, dice José Antonio Sánchez, apicultor y cafetero, de la vereda La Secreta, del municipio de Ciénaga, Magdalena.

A las víctimas que van a ser indemnizadas se les beneficia con un acompañamiento para la inversión que son herramientas complementarias para la medida de reparación.

“Yo quería mi casa, después tuve el anhelo de tener mi propio negocio, de ser una mujer totalmente independiente como lo he sido siempre. Aprendí cómo reducir mis gastos, cómo ahorrar, cómo manejar una agenda en mi vida, o sea, un proyecto, ¿entonces qué hice? Invertí, construí algo que

beneficiaba a mi familia. Después con el excedente lo invertí en mi negocio”, expresa una víctima de violencia sexual.

Como ya lo mencionamos, toda esta oferta estatal que se enmarca en acciones materiales a las víctimas también va acompañada de acciones psicosociales por la importancia de restablecer el derecho del ser. Eso da pie para hablar de los temas de reparación en diferentes componentes. Uno de los más significativos, por su alcance colectivo, ha sido, sin lugar a duda, lo concerniente a las Medidas de Satisfacción, asunto en el cual la Unidad ha venido cumpliendo con el propósito de reconocerles el sufrimiento vivido, su dignificación y el rechazo de los hechos de violencia ocurridos.

Como homenaje a los más de 8 millones de sobrevivientes del conflicto armado y al recuerdo de los familiares que ya no están con ellos, se ha establecido el “Día Nacional de la Memoria y

Solidaridad con las Víctimas”, que se conmemora cada 9 de abril, y que se ha convertido en el evento de remembranza de mayor significado con el que se ha sensibilizado a la sociedad colombiana.

En este sentido, también es menester subrayar el énfasis en el enfoque diferencial que la Ley de Víctimas ha querido impulsar, acento que con justicia busca priorizar la atención y la reparación de los grupos considerados más vulnerables en todo conflicto. Se ha instaurado el 25 de mayo como la fecha para conmemorar el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado.

Además, no se debe olvidar que la Ley de Víctimas camina de la mano de los decretos leyes 4633, 4634

**“Cuando llegué había 25 mujeres, y empezar a escuchar a cada una, cosas similares a las que yo he vivido, o peores, darles a conocer también lo que había vivido, empieza a llenarlo a uno de fortaleza.”**

*Relato de víctima de la violencia.*

y 4635, del 9 de diciembre de 2011, que buscan enmendar la vida de los grupos étnicos indígenas, gitanos y de las víctimas pertenecientes a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, respectivamente.

Igual importancia revisten los más de un millón de mensajes estatales de “dignificación y reconocimiento”, los múltiples apoyos a iniciativas locales de memoria y el acompañamiento a miles de víctimas en los actos de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas que han ofrecido sus victimarios.

En cumplimiento de la medida de indemnización administrativa que consagra la Ley de Víctimas, la Unidad ha indemnizado a cerca de 800.000 víctimas del conflicto, con una inversión de más de 5 billones de pesos, lo que convierte a Colombia en el país que más víctimas ha reparado en el mundo.

Si bien la cifra no parece representativa bajo la lupa colombiana, internacionalmente el ojo avizor del informe de Harvard afirma que “la Unidad para las Víctimas ha indemnizado una gran cantidad de personas en un plazo relativamente corto. Y ha sido muy eficiente si se compara con otros programas en el resto del mundo”.

A diferencia de otros países, Colombia asumió la responsabilidad de la atención humanitaria para las personas que han sufrido o sufren el flagelo del desplazamiento interno o el tema del refugio.

## El efecto reparador de la inclusión productiva

Ya avanzado este proceso entramos a los mecanismos de asistencia a las víctimas que

buscan generar una transición de ellas hacia la estabilización socioeconómica. Así hemos podido entrar a hablar de los temas de generación de ingresos y de retorno.

Hasta el momento se han materializado muchos programas en el territorio para generar esa sostenibilidad en los procesos de las víctimas retornadas y en esquemas productivos en mecanismos de alianza público-privadas, alianzas entre autoridades nacionales y territoriales que generan esa sostenibilidad, como es el caso de don

Joel Reyes, víctima, caficultor y líder municipal de la vereda Aguabendita, de Aracataca (Magdalena). Allí el proyecto de generación de ingresos se ha transformado en un exitoso plan sostenible.

“Ya nos dieron el material; ahora de nosotros depende poner de nuestro empeño para seguir adelante, o sea, no solamente es recibir y quedarse uno estancado ahí, sino que nos dieron 3.500 matas de café, y la idea es que esté produciendo y tener una

sostenibilidad sobre ese café”, expresa don Joel.

Similar experiencia se rastrea en Zipacoa, en el municipio Villanueva (Bolívar), donde la comunidad ha ido avanzando también con una infraestructura que le ayuda a generar procesos con autosostenibilidad. Igualmente, hay casos como el de La Secreta, vereda de Ciénaga (Magdalena) en el que las víctimas no solo iniciaron todo un proceso de retorno, sino que además son sujetos de reparación colectiva.

Es así como 1,8 millones de víctimas han sido beneficiarias de programas que apoyan la generación de ingresos a través de proyectos productivos, apoyo a la empleabilidad y formación para el trabajo. A su vez, 112.000 personas han sido beneficiadas mediante 87 proyectos cofinanciados

**Decidimos volver porque esta es la tierra de uno. ¡Qué mejor que llegar a la tierra donde uno siempre ha trabajado!**

*José Antonio Sánchez, apicultor y cafetero.*





por la Unidad con entidades territoriales para la asistencia, atención y reparación integral a víctimas, por un valor de 155.000 millones de pesos.

Como botón de muestra de lo anterior, algunos proyectos de los caficultores son acompañados por la Federación Colombiana de Cafeteros.

La alianza entre entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas (SNARIV) se puede evidenciar en el caso de José Jairo Galindo, víctima de desplazamiento que se acogió a la Ley de Víctimas y comenzó la solicitud de restitución de la finca Villa Nueva, en Norte de Santander, porque soñaba ser parte del sector arrocero.

“Nos indemnizaron por el lado de la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Tierras nos respaldó con un proyecto productivo, lo que sirvió para arrancar la primera cosecha, en 2015. Ahora vamos poco a poco. Tengo varias hectáreas cultivadas y una que otra fruta de apoyo. El fuerte es el arroz.

También tengo cachama en un estanque. Se puede trabajar bien si hay tranquilidad”, dice.

Reconocemos que uno de los retos es avanzar en la reparación colectiva. Hasta hoy se ha avanzado en la reparación de un poco más de 280.000 víctimas que hacen parte de 124 grupos reconocidos como sujetos colectivos, de los 620 registrados. No obstante, el informe de Harvard asegura que “las comunidades, étnicas o campesinas, vieron la reparación como una oportunidad para reconstruir la comunidad, aumentar los retornos y reubicación de sus miembros, desarrollar estrategias económicas y reparar el tejido social”.

## De la reconstrucción del tejido social y la confianza en el Estado

Las huellas que deja la Unidad para las Víctimas se pueden palpar en varios frentes de acción. Primero,

en esfuerzo por la reconstrucción del tejido social, que se da en la medida en que se implementan las acciones que trae la política pública a las víctimas de manera integral y acompañadas de estrategias de atención psicosocial que van enmarcadas en ese tema, porque es uno de los componentes más importantes.

“Anteriormente, cada persona tenía sus propios cultivos, entonces yo veía que éramos desunidos, cada uno estaba por su lado. Ahora la reflexión que hemos tenido es que nos hemos unido y se está integrando más gente, porque si estamos unidos podemos jalonar más proyectos, porque una golondrina no hace verano. Se cree ya en lo que se está haciendo ahora, hay más unión con la misma comunidad”, dice Francisco Guejía, líder comunitario de La Secreta, Bolívar.

Segundo, se aprecia en los temas de participación, que contemplan un mecanismo que permite a las víctimas participar de manera directa en los escenarios de toma de decisiones.

“Tenemos que jugar un papel importante para que logremos no solo que se entienda la paz, que no se trata solo de callar los fusiles, sino que es llevar a todas las regiones del país el desarrollo tan anhelado planteado en el Acuerdo de Paz”, dice Maicol Hernández, miembro de la Mesa Departamental de Quindío.

El tercer frente es el reconocimiento de las víctimas, porque eso evita estigmatizaciones y discriminaciones en contra de ellas.

Ejemplo de ello es Edna Magaly Ayala, comunicadora social de 29 años, reina nacional de

Las Colonias en el 2010, quien tiene a veces una forma muy particular de presentarse.

**Tenemos que jugar un papel importante para que logremos no solo que se entienda la paz, que no se trata solo de callar los fusiles, sino que es llevar a todas las regiones del país el desarrollo tan anhelado planteado en el Acuerdo de Paz.**

*Maicol Hernández. Mesa Departamental de Quindío.*

“Yo soy una víctima del conflicto armado: las Farc asesinaron a mi padre, hirieron a mi madre y nos desplazaron del pueblo. Yo, como más de 8 millones de personas en este país, he vivido las consecuencias de la guerra. Las víctimas del conflicto son como todos ustedes, personas con hogares, con dignidad, con sueños, solo que la violencia los obligó a aplazarlos”.

Uno de los obstáculos que se ha ido superando durante el avance de la implementación de la Ley 1448 de 2011 es la desconfianza en el Estado generada por el conflicto armado. Éxito es que las víctimas crean en su país y se sientan también parte de la población; es decir, que se sientan parte también de todo este proceso. Con los procesos

integrales que trae la política de víctimas se han ido generando los mecanismos para lograrlo.

Remontar este obstáculo permite decir claramente que el mayor legado en estos años de labores es que el país cambió. El simple hecho de que el Estado reconociera a las víctimas fue un cambio notable, que logró que la sociedad reconociera el tema y la importancia de su reparación para llegar a la firma del Acuerdo de Paz y que los sobrevivientes, al mirarse a un espejo, ya no reflejaran ese vestido de tristezas, sino que puedan ver una ilusión.

Como lo afirma el estudio de Harvard: “la cantidad de víctimas que el programa de reparación colombiano aspira a ayudar es, por mucho, mayor a la que cualquier otro programa de reparación ha aspirado, tanto en términos absolutos como relativos al tamaño de su población”.



## Desafíos de la implementación de la Ley de Víctimas

Sin embargo, reconocidos los esfuerzos, debe decirse que hay que redoblarlos con el fin de alcanzar las metas impuestas por la Ley de Víctimas, tal como lo expresa el informe de Harvard:

“La reparación del 12,7 por ciento de la población implica que el Gobierno en general tendrá que incorporar la política de reparación a su política macroeconómica en años venideros, de modo tal que las reparaciones sean un elemento fundamental de discusión de economía política. Deberá igualmente analizarse la posibilidad de que los recursos financieros necesarios para el programa de reparación tengan que provenir de fuentes adicionales a las actuales. El cumplimiento cabal del ambicioso compromiso de reparar a individuos y a colectivos perjudicados por el conflicto en Colombia requiere un acuerdo social

amplio y legítimo. Aun haciendo su mejor esfuerzo y con una significativa mayor capacidad, la Unidad para las Víctimas no podría lograr las metas que se ha propuesto el programa de reparación sin el apoyo financiero y político del Gobierno y de la sociedad en general”.

En este momento, ad portas de un nuevo gobierno, resuenan las palabras del presidente Santos cuando sancionó la Ley 1448: “Es ahora cuando se pone a prueba la capacidad y la voluntad no solo del Estado, sino de toda la sociedad colombiana, para cumplirles a las víctimas, a esos cientos de miles de colombianos que han perdido sus seres queridos, su salud o sus tierras por causa del conflicto. ¡Y lo vamos a hacer! ¡Podemos hacerlo!”





La niñez:  
prioridad del gobierno Santos

Nunca antes en la historia de Colombia un gobierno le había apostado tan decididamente a mejorar la situación de la niñez. En los últimos ocho años el número de niños y niñas que son atendidos de manera integral en los programas de primera infancia se incrementó 120 por ciento, el programa de Cero a Siempre se convirtió en política de Estado, los recursos destinados para su atención crecieron 300 por ciento y se fortaleció la capacidad institucional para responder efectivamente a las necesidades de la niñez.

A través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como entidad del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación encargada del cuidado y la protección de la niñez, el Gobierno Nacional atiende directamente a cerca de 2,8 millones niños, niñas, adolescentes y sus familias con sus diferentes programas.

Esto muestra claramente el compromiso del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con los niños, niñas y adolescentes del país, y de su firme convicción de que invertir en ellos, quienes son el presente y el futuro del país, permitirá hacer de Colombia un país mucho más próspero y en paz. En sus propias palabras “La inversión más rentable, desde el punto de vista social, que puede tener cualquier sociedad es la inversión en primera infancia”.

## De Cero a Siempre

Cerca de 2 millones de niños y niñas menores de 5 años atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) son la mejor prueba de lo que la primera infancia ha representado para el gobierno Santos. La inversión en primera infancia creció de 1 billón de pesos en 2010 a 4 billones de pesos en 2018.

La estrategia De Cero a Siempre, convertida en política de Estado en 2016, se trazó la meta de incrementar la atención integral de los niños y las niñas de 0 a 5 años, una de las etapas más importantes para su desarrollo cognitivo,

emocional y social. Pasó de 566.000 beneficiarios en 2010 a 1.250.000 niños y niñas en 2018. De igual forma, 800.000 menores de 5 años son atendidos por las madres comunitarias.

También fue impactada positivamente la vida de las 50.000 madres comunitarias formalizadas laboralmente. A esto se suma el mejoramiento y la dotación en el país de 70.727 unidades de servicio, para ofrecer mejores espacios que les garanticen a los niños y niñas áreas para jugar, soñar, desarrollarse y crecer felices.

Además de espacios seguros y protectores, a través de las modalidades de atención, el ICBF le brinda a la primera infancia el 70 por ciento del requerimiento calórico nutricional diario, aseguramiento en salud, vacunación, registro civil, entre otros, mejorando la calidad de vida y la educación inicial de la niñez colombiana.

Cerca de 64.000 agentes educativos y madres comunitarias han adelantado procesos de cualificación y formación para potencializar su labor, sus conocimientos y las prácticas pedagógicas que desarrollan diariamente con los niños y niñas.

Ana Milena Cadera Olave, una madre comunitaria de Valle del Cauca, ratifica el valor de esta formación. “El haber estudiado el técnico en atención a la primera infancia me ayudó a fortalecer mi aprendizaje y a perder mi miedo a expresar lo que somos, lo que queremos; me ayudó a fortalecer y a identificar lo que el niño y la niña necesitan para interactuar sin miedo”, dice.

Durante este gobierno fueron construidos 252 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) para la atención integral de los niños y niñas de 0 a 5 años. Y para garantizar la atención diferencial a las poblaciones indígenas, afrocolombianas, rom y raizales, el ICBF diseñó e implementó la modalidad propia e intercultural que permite ofrecer servicios integrales en sus territorios sobre la base del respeto a su cultura, ideología y cosmovisión.





El líder indígena Gumersindo Iguana González, de Uribia (La Guajira), da cuenta de que vamos por buen camino: “Estamos muy contentos y agradecidos con este servicio del Bienestar Familiar, porque los niños de nuestra comunidad pueden tener una atención que los prepara para que tengan un buen futuro y porque diariamente reciben una buena alimentación para crecer sanos y fuertes”.

## Atención a la niñez y la adolescencia

El ICBF como entidad que trabaja por la protección integral de la niñez y la adolescencia, ha desarrollado en los últimos ocho años, diversas estrategias para la prevención de la vulneración de sus derechos.

Entre 2010 y 2013 se beneficiaron cerca de 4 millones de niños, niñas y adolescentes cada año a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), cuya finalidad era prevenir la deserción escolar. A partir del 4 de octubre de 2013, se dio la transferencia de este programa al Ministerio de Educación Nacional.

Asimismo, en su tarea de promover los proyectos de vida de los niños y adolescentes, a partir de

su empoderamiento como sujetos de derechos y del fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado, el ICBF implementó programas de prevención para la niñez y la adolescencia que han permitido atender a 1,4 millones de beneficiarios.

Se implementó la estrategia Generaciones con Bienestar que enseña a los niños y adolescentes a usar su tiempo libre, a construir su proyecto de vida a través de ideas emprendedoras y a formarse en actividades artísticas y deportivas. Se beneficiaron 731.901 niños, niñas y adolescentes en las modalidades tradicional, rural y étnica.

Se crearon, además, tres estrategias encaminadas a la promoción de derechos y prevención de vulneraciones. La primera, Acciones Masivas de Alto Impacto Social (AMAS), incorpora expresiones como el arte, la cultura, las tradiciones, el juego, el deporte o las comunicaciones, logrando la atención de 54.043 niños, niñas y adolescentes con una presencia en 32 departamentos y 250 municipios.

Con la estrategia Construyendo Juntos Entornos Protectores, cuyo objetivo es fortalecer los vínculos de cuidado mutuo y la convivencia armónica, a



través de espacios de información, formación y reflexión entre padres, madres, cuidadores, docentes y agentes educativos, se han atendido 18.700 niños, niñas y adolescentes, y 39.000 padres, madres y cuidadores, en 1.369 establecimientos educativos.

Mediante la estrategia de Prevención del Embarazo Adolescente (PEA), implementada en 364 municipios, se atendieron de forma directa 19.921 niñas y adolescentes. Como resultado de estos programas y en apoyo con otras entidades del Estado, sobresale la reducción en 2 puntos porcentuales de la tasa de embarazo adolescente, que pasó de 19,5 por ciento en 2010 a 17,4 por ciento en 2015, lo cual resulta significativo dado que es la primera vez que disminuye en la última década.

## Acompañamiento a las familias

El ICBF trabaja con las familias colombianas para que constituyan el principal entorno protector de los niños, niñas y adolescentes. Allí se generan los primeros vínculos de cuidado y se consolidan como garantes de sus derechos.

Proteger a los niños y adolescentes es posible si las familias fortalecen sus capacidades para promover su desarrollo, afianzar sus vínculos de cuidado mutuo y prevenir la violencia contra la niñez y de género.

Durante los últimos cuatro años, el ICBF ha logrado atender a 2 millones de familias para mejorar sus relaciones y agenciar su inclusión social y la de sus integrantes. De la misma forma, se han beneficiado otras 23.500 familias rurales, fortaleciéndolas para impulsar acciones de paz y reconciliación y participar en los procesos de desarrollo local.

**La inversión más rentable, desde el punto de vida social, que puede tener cualquier sociedad es la inversión en la primera infancia.**

*Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República*

## Lucha contra la desnutrición

La entidad lideró el Plan de Atención y Mitigación del Riesgo de Desnutrición Infantil, para identificar a la población con mayores problemáticas nutricionales y actuar con intervenciones integrales.

Para atender a esa población, se diseñó la Estrategia de Recuperación Nutricional a través de diferentes modalidades: Centros de Recuperación Nutricional, Recuperación Nutricional con Enfoque Comunitario y Recuperación Nutricional con énfasis en los primeros mil días. Esta última atiende a los niños y niñas menores de 5 años, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia, con el propósito de contribuir al mejoramiento de su estado nutricional.

A estas acciones se suman los resultados de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2015 (ENSIN), como respuesta al compromiso con el país de obtener información periódica que permita tomar decisiones de política pública en el marco del derecho a la alimentación, como derecho fundamental que contribuye a mejorar la calidad de vida de los colombianos.

La información de la ENSIN ha permitido medir los problemas nutricionales de la población colombiana, así como identificar los determinantes sociales, los indicadores y las tendencias del país en materia nutricional, como insumo para apoyar la toma de decisiones políticas y técnicas para su intervención.

Vale la pena destacar el descenso significativo en materia de desnutrición crónica, que mide el

retraso en la talla para la edad de los niños, que pasó de niveles de 13,2 por ciento en 2010 hasta el 10,8 por ciento en 2015. Además, la inseguridad alimentaria se redujo de 57,7 por ciento a 54,2 por ciento en el mismo periodo.

De la misma forma, el 72 por ciento de los menores de 2 años de edad recibió lactancia materna en su primera hora de vida, con lo cual Colombia supera la meta del 70 por ciento establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para mejorar el inicio temprano de la lactancia materna. Como parte de otras acciones adelantadas en materia nutricional, el ICBF fortaleció el proceso de producción y distribución de alimentos de alto valor nutricional (Bienestarina Más, Bienestarina líquida, alimento para la mujer gestante y madre en periodo de lactancia) entregando 140.000 toneladas de alimento de alto valor nutricional a los beneficiarios de los diferentes programas del Instituto.

## Mil días para cambiar el mundo

En la lucha contra la desnutrición, el ICBF creó la modalidad Mil Días para Cambiar el Mundo que hoy permite atender cada año a 19.840 beneficiarios, entre niñas y niños menores de 2 años, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia.

Por su parte, en la modalidad de Centros de Recuperación Nutricional se atendieron 15.000 beneficiarios en los últimos cinco años. Vale destacar que a través de dichos Centros se reporta un mejoramiento de hasta el 85 por ciento del estado de salud de los niños que ingresaron con altos niveles de desnutrición y que son atendidos allí.



## Lucha contra las violencias hacia la niñez

Durante el último año se firmaron pactos contra las violencias hacia las niñas, niños y adolescentes para que las autoridades locales se comprometieran a luchar de manera concreta contra todo tipo de violencia, incluyendo las lesiones ocasionadas por la manipulación de pólvora, considerado maltrato por negligencia.

El ICBF puso en funcionamiento la línea 141, como un canal de comunicación para que los niños, niñas y adolescentes, puedan denunciar y recibir asistencia en cualquier caso de vulneración de sus derechos.

Durante los últimos cuatro años se ha registrado una disminución significativa en la tasa nacional de trabajo infantil. Mientras en 2013 alcanzaba el 9,7 por ciento, para 2017 la cifra reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) disminuyó a 7,3 por ciento.

Continuando con esta estrategia, el ICBF en coordinación con el Ministerio de Trabajo, implementó la campaña 'Presente contra el trabajo infantil'. Hoy 1.200 niños, niñas y adolescentes están siendo atendidos con acceso a la oferta institucional. De ellos, cerca de 500 ya reciben atención en externados, hogares sustitutos y otras modalidades que ofrece el Instituto.

En 2017 la entidad realizó una campaña de socialización y concientización en todos los departamentos de Colombia -con la participación

de las autoridades departamentales, municipales y la comunidad-, contra el uso de la pólvora por parte de niños, niñas y adolescentes, con la cual se logró una disminución del 23 por ciento en el número de casos de niños quemados por su manipulación.

## Esperanza para hacer parte de una familia

El ICBF busca garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados y que se encuentran bajo protección, puedan tener una familia mediante la adopción.

En los últimos cuatro años, 6.000 niños, niñas y adolescentes han sido dados en adopción. Con la promulgación de la nueva Ley 1878 se redujo a 18 meses el plazo para definir la situación jurídica de las niñas, niños y adolescentes bajo protección.

Cerca de 27.600 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en las diferentes modalidades de protección, tienen garantizado, no solo las condiciones para su desarrollo y crecimiento, sino también un hogar que les brinda cuidado y protección.

## Modelo en transparencia

El ICBF logró un notable mejoramiento en cuanto a los resultados de la gestión en sus índices de transparencia y eficiencia que hoy son reconocidos por organizaciones certificadoras de calidad y entes de control.

Este esfuerzo se evidencia en la posición que la Entidad ocupó en el Índice de Transparencia de Entidades Públicas 2017. En este listado, pasó a ocupar el séptimo puesto entre las entidades del

**Es muy bueno que el Gobierno se ocupe de que las adolescentes no quedemos embarazadas. Yo cuido mi futuro, tengo claro mis sueños y ellos están a salvo, guardados donde nadie me los puede arrebatar.**

*Saray, adolescente de 16 años, estudiante de décimo grado (San Andrés y Providencia)*



orden nacional, ascendiendo más de 70 lugares. También obtuvo la mejor ejecución presupuestal de las últimas dos décadas.

El mejoramiento en la ejecución presupuestal ha sido notable, al pasar de niveles de 93,8 por ciento en 2011 a lograr el mejor registro histórico en dos décadas con 99,6 por ciento en 2017. Una clara muestra del mejoramiento en la capacidad institucional para la gestión de los recursos públicos destinados para los niños.

Además de estar en ese ‘top 10’ de las entidades públicas con mejores índices de transparencia, el compromiso con el uso eficiente de los recursos no se detiene. El ICBF hizo una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad Nacional de Colombia para implementar nuevos mecanismos de acompañamiento, control y seguimiento de la ejecución de los recursos de la niñez, y para lograr

una mayor participación de la sociedad como veedora de las acciones del Instituto.

La alianza firmada con el BID y la Universidad Nacional se suma a las diversas estrategias de transparencia, como el banco de oferentes que actualmente cuenta con cerca de 3.200 entidades habilitadas para operar los diferentes programas del Instituto, la movilización social para el ejercicio de la veeduría ciudadana y la ampliación de los canales de comunicación.

## Fortalecimiento del equipo de colaboradores

Todos estos logros no serían posibles sin el gran capital humano que tiene la entidad y que se fortaleció con la firma, por parte del Presidente, del Decreto 1479 de 2017, mediante el cual se



amplió la planta de colaboradores en 3.737 cargos. De esta manera también fueron fortalecidos los equipos de las Defensorías de Familia. La planta global del Instituto pasó de 5.127 a 8.864 empleados vinculados directamente. “Cuidar y proteger a los niños también significa garantizar que cada peso invertido en ellos se haga de forma óptima, técnica, rastreable y con altos estándares de calidad”, expresa Karen Abudinen Abuchaibe, directora general de la entidad.

## Retos del ICBF para el futuro de los niños en Colombia

Este es un gran camino andado, pero no todo el camino. El ICBF es plenamente consciente de los retos pendientes para el presente y futuro de los niños de Colombia. En esa medida, debe enfatizarse:

- Fortalecer la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre, lo cual implica mayor articulación interinstitucional del Gobierno Nacional con las autoridades locales, que permita ampliar la cobertura de atención de los niños y niñas menores de 5 años, así como su tránsito al sistema educativo formal, para que todos tengan acceso a servicios que promuevan su desarrollo integral.
- Implementar la nueva política pública para la niñez y adolescencia que permita la promoción de derechos y prevenga su vulneración, involucrando a padres, madres, cuidadores, docentes, agentes educativos y la sociedad en general. Esto requiere el diálogo intersectorial e intercultural

**Cuidar y proteger a los niños también significa garantizar que cada peso invertido en ellos se haga de forma óptima, técnica, rastreable y con altos estándares de calidad.**

*Karen Abudinen Abuchaibe, directora General del ICBF*

para el abordaje de las temáticas dada su complejidad en el territorio.

- Reforzar la estrategia de transparencia en el uso de los recursos y la calidad de todos los servicios que prestan los operadores de los diferentes programas y servicios de atención, mediante la consolidación de un sistema de seguimiento, inspección, vigilancia y control, con el acompañamiento de organismos multilaterales y la academia.
- Fortalecer los procesos de lucha contra todas las formas de violencia contra la niñez, lo cual implica una articulación con los sectores salud, trabajo, educación y justicia, para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de violencia.
  - Promover el uso de herramientas tecnológicas para padres, madres y cuidadores con el fin de contribuir en la generación de espacios de reflexión y acciones de promoción de entornos protectores para los menores de edad.
  - Aumentar la cobertura en la atención de niños, niñas y adolescentes en todos los programas y estrategias de promoción de los derechos y prevención de vulneraciones.
  - Consolidar un plan de acción que permita -de manera gradual-, reducir la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones de protección, para garantizarles el derecho a tener una familia que les brinde amor, cuidado y protección.
- Fortalecer la atención que se adelanta en los departamentos y municipios, en el marco de la promoción de derechos y prevención de vulneraciones a niños, niñas, adolescentes, padres, madres y cuidadores que se encuentran en los

Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación de tal forma que aporte a la garantía de derechos, construcción de paz, y a la convivencia armónica.

- Contribuir a la construcción de una política de seguridad alimentaria y nutricional en los distintos territorios e impulsar acciones articuladas que promuevan la alimentación sana, nutritiva y suficiente, evitando el retraso en los procesos de desarrollo y crecimiento de niños, niñas y adolescentes.
- Contribuir a la pervivencia de las comunidades étnicas a través de acciones que recuperen y afiancen sus valores culturales y fortalezcan sus capacidades socio-organizativas.







The background of the entire page is a warm, golden sunset. The sun is a bright, glowing orb on the left side, casting a long, soft light across the sky. In the lower portion of the image, the silhouettes of several thatched-roof huts are visible against the horizon, suggesting a tropical or coastal setting. A dark green rectangular box is positioned in the center of the page, containing the text.

# SEGUNDA PARTE

Historias de un nuevo  
amanecer





Valeriano Domínguez,  
un líder del campo para  
la ciudad

De pronto el ambiente festivo con el que arrancó la entrevista se ensombreció. Pero era necesario soltar la inevitable pregunta: ¿Cómo llegó aquí? Es una zona de colinas en Pasto, capital de Nariño, conformada por dos enormes urbanizaciones de vivienda de interés prioritario habitada por refugiados del conflicto armado y damnificados de olas invernales o reubicados desde zonas de alto riesgo. La mayoría son víctimas.

Son dos conjuntos gigantescos: San Sebastián y San Luis. Suman 1.508 apartamentos, todos subsidiados y entregados entre 2013 y 2014 a población vulnerable, en uno de los programas sociales más ambiciosos de este Gobierno que termina. Los colores vivos de las 45 torres de seis pisos que integran estas urbanizaciones contrastan con los dolores latentes que se esconden tras sus paredes.

Por eso la pregunta. Es parte de la historia de esta familia que nos recibe sonriente, con la mesa dispuesta en una invitación a desayunar. Inagotable generosidad, pese a una historia relativamente reciente de carencias extremas. Para las primeras frases del relato de la tragedia a la que sobrevivió, Valeriano Domínguez todavía sostiene el ánimo inicial y cuenta serenamente que llegó solo a Pasto, porque lo habían desplazado de la vereda Tajumbina, municipio de La Cruz, en Nariño. Le tocó “salir como fuese”, abandonando a su esposa y a la menor de sus hijas, todavía muy pequeña. Las dejó solas hasta que pudo volver por ellas un mes después, en una entrada furtiva a la vereda.

Al entrar en detalles del episodio, el hombre robusto, bonachón y feliz de hace unos instantes se transforma. Su fortaleza se quiebra. La energía le cambia.

“La verdad, ¿cómo le digo? Fue por un señor al que quise salvarle la vida”.

Se detiene en la frase. Por un instante su mirada se pierde en el aire y vacila, como si quisiera encontrar

fuerza en alguna parte antes de esconder con desesperación el rostro detrás de sus manos rudas de campesino.

“¡No pude! ¡No pude hacer nada!”, exclama en voz baja, mientras su voz se quiebra en un sollozo. “¡Yo era un líder en la vereda y no pude hacer nada!”.

El dolor se posa también en los miembros de este hogar. El relato duele, pero ratifica la convicción de que, para este hombre y sus seres queridos, como para miles de colombianos que han padecido el mismo flagelo, la paz cobra un aplastante sentido en sus circunstancias.

Estamos sentados alrededor del comedor familiar. Ninguno mira a los demás. Su esposa Luz Dary, Angie Paola, la hija de ambos y Evelyn Yineth, la nieta de 4 años, acompañan a Valeriano a recorrer recuerdos ingratos. Todos han agachado la cabeza, incluso los visitantes. La mirada está fija en el suelo, en un silencio de duelo que por fin Valeriano rompe al recobrar fuerza para completar su relato.

“Era un muchacho que había venido de Cali con un primo que había ido a visitarme. Ese día, un domingo, que fueron a verme yo no estaba en la casa, había salido para otra vereda. El muchacho había estado haciendo una llamada a otro compañero desde un teléfono que había en el pueblo. Entonces lo cogió la guerrilla. Mi primo, como era tan conocido, se valió de la gente para que no se lo llevaran. Pero se pusieron a ver un partido de fútbol mientras encontraban carro para transportarse hacia La Cruz. Como no pasó carro ligero, volvieron al pueblo y allí se lo llevaron (al muchacho). Lo condujeron al monte. Cuando yo volví, mi primo me contó lo que había pasado. El muchacho era amigo suyo. Me pidió que intercediera para que lo soltaran. Yo era muy conocido, era un líder allá”.

Valeriano cuenta que logró localizar a una de las personas que había participado en el rapto del muchacho y trató de convencerlo de que el visitante no era persona vinculada al conflicto. “Yo



no lo conozco, no lo distingo, pero por mi primo quiero que al muchacho lo dejen libre”.

“Yo creo que está como complicado”, le contestó el guerrillero, prometiéndole, no obstante, hablar con los jefes y darle razón al día siguiente. Ya era lunes.

El martes, a la 1 de la tarde, tal como acordaron, le llevaron donde los tres jefes guerrilleros para que interceder por el muchacho secuestrado. Lo dejaron hablar y luego lo interrogaron. La conversación, citada por Valeriano, fue más o menos así:

- ¿Usted lo conoce?
- No.
- ¿Entonces por qué defiende a alguien que no conoce?
- Más que todo porque se trata de defender una vida.
- No se ponga usted a defender a quien no conoce. Este señor vino y casi nos hace coger por el ejército. Hubiera habido una

tragedia bien grave aquí si nos hubiera tocado enfrentarnos.

Había ocurrido lo siguiente: el día que capturaron al muchacho, justo una hora después de que se llevaron del pueblo, llegó el Ejército. La guerrilla estaba convencida de que el muchacho era un informante de las Fuerzas Armadas.

Durante la primera década de este siglo, Nariño y su zona nororiental fueron escenarios principales del conflicto armado. La Cruz, una de las poblaciones más antiguas del departamento, estaba en primera plana de las confrontaciones. Y la Tajumbina, situada a unos 12 kilómetros al suroriente de La Cruz, era una zona arqueológica sitiada. Como el vecino Cauca, Nariño fue uno de los departamentos que más sufrieron el conflicto en la primera década de este siglo.

“En el momento ellos me dejaron. Pero me empezaron a hacer seguimiento. Me di cuenta porque a los pocos días llegó un señor a hacerme una cantidad de preguntas que podía habérselas



hecho a otra persona. Pero preciso llegó a hacérmelas a mí. Unos días después un vecino de ahí de la vereda, conocido de toda la vida, se me acercó y me dijo: ‘Valeriano si tú quieres salvar la vida ándate hoy por la noche’. Yo supe que tenía que salir porque él me estimaba mucho y no mentía. Le pregunté cuál era el motivo, pero no me respondió. ‘Solo así te digo’, me dijo. ‘Tienes que salir hoy’”.

Valeriano fue donde su esposa a anunciarle que tenía que irse. Solo, porque no tenían dinero ni dónde llegar. Salió de noche del pueblo y viajó a Pasto, donde tenía un familiar. Llegó sin dinero y sin trabajo. Las noticias que salieron del pueblo revelaron que al muchacho lo encontraron muerto y torturado. “Dios sabe que hice todo lo que estuvo a mi alcance. Pero no pude salvarlo”.

Se pasa rápidamente el dorso de la mano por los ojos para secarse un par de lágrimas, que como las de su mujer y su hija, aparecen al evocar esas horas tristes. Pero va recuperando la calma.

“Yo la verdad me sentía muy mal. Había dejado todo y aquí no tenía nada. Nadie que me conociera. En la vereda, de donde soy y donde vivíamos, cultivábamos verduras, matas, mi esposa tenía también un negocito donde vendía salchipapas los fines de semana. Así trabajábamos”.

Un día, desesperado, fue a la Gobernación a buscar ayuda. Le aconsejaron ir a un lugar para declarar como desplazado y le ayudaron a conseguir una cita para el día siguiente, muy temprano. “Así fue como yo mismo supe cómo se llamaba mi situación, supe que se llama desplazamiento. Allá donde me registré recibí la primera ayuda humanitaria y pude ir, un mes más tarde, por mi esposa y por mi hija. Nos vinimos para Pasto”, dice.

No lo sabe, pero así se convirtió en uno de las más de 380.000 personas que figuran en el Registro Único de Víctimas (RUV) de Nariño. Entre ellas, más de 70.000 están anotadas en Pasto como desplazados del conflicto. Valeriano y su familia, ingresaron a esa lista.

## Volver a empezar

“Eso del desplazamiento fue increíble. Duró mucho tiempo. A nosotros nos desplazaron en el 2001 y yo no sabía qué era ser desplazado. Me anoté en lo de víctimas, pero no tenía claro para qué servía eso, ni qué ayudas había para personas en situación como la de nosotros. ¿Qué podíamos hacer? Nada. Me enfermé”.

Caminaba largas distancias en busca de algo con lo que sostener a su familia. No tenía siquiera para el transporte. No conseguía labor remunerada por ningún lado.

“Como desplazado, nadie le da a usted trabajo. En medio de esa desesperación, un cuñado me ofreció que tomáramos en compañía un lote en arriendo. Era un lote pelado, de piso en tierra. Un primo que había llegado a la ciudad me prestó 500.000 pesos. Tomamos en arriendo ese lugar asegurando lo de dos meses de alquiler. Así empezamos de nuevo”.

Levantaron una casa con tablas y un techo provisional. Aquello que usaban como baño quedaba como a una cuadra de distancia. Esta familia aquí sentada se ríe de las anécdotas que eso generó. Allí adaptaron un parqueadero en el que Valeriano trabajaba día y noche. Su cuñado se retiró y tuvo que conseguir otro socio. Aunque les fue bien, volvió a quedar solo. Pidió permiso al dueño para subarrendar pedazos del lote y prestar servicios de mecánica, latonería y pintura “Así fueron mejorando las cosas, pero era una vida muy dura. Casi no dormía por trabajar y las condiciones eran muy malas.”

Luz Dary cuenta que el piso era de tierra y solo tenía un espacio donde cocinaban y dormía la familia. Ella se ganaba algo de dinero haciéndole gestiones a sus antiguos vecinos de la vereda sacándoles por ejemplo citas médicas o haciéndoles otras diligencias en la ciudad.

“Un día llegó una muchacha de chaleco azul hablando de la Red Unidos. Dijo que estaban

haciendo un censo. Yo le dije que no éramos de ahí, que éramos desplazados. ‘Precisamente –me contestó. La Estrategia Unidos es para personas como ustedes. Hablemos porque esto les va a servir’ –dijo. Se llamaba Sandra Paz, recuerda Luz Dary. Yo creo que fue en ese momento que la vida empezó a mejorar para nosotros, aunque al principio no nos dimos cuenta ni creíamos mucho”.

Unidos es una estrategia que materializa la acción de la red del mismo nombre. El 21 de junio de 2016 fue convertida en Ley Unidos. Para constituir la Red Unidos el Gobierno Colombiano convocó la acción conjunta de las entidades que tienen oferta social y de esta manera dar respuesta integral a la multidimensionalidad de la pobreza extrema. La coordina Prosperidad Social. La chica del chaleco azul era una cogestora, agente de campo de esta estrategia dirigida a las familias más pobres, de acuerdo con el sistema de puntajes del Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (Sisbén) o familias en condición de

desplazamiento. Al finalizar el Gobierno Santos, se aspira a haber acompañado por lo menos un millón de hogares urbanos, rurales y étnicos, para ayudarlos a alejarse de la extrema pobreza.

Para la cogestora Sandra, Valeriano solo tiene palabras de agradecimiento: “ella fue mucho lo que nos ayudó, informándonos, orientándonos, dándonos ánimo, colaborándonos con las dudas que teníamos de los papeleos, con los cambios. Sembrándonos esperanza; se necesitaba. Después de hacer una fila larguísima y esperar horas en el primer sorteo al que fuimos entregaron 860 viviendas, creo, pero no salimos favorecidos. A mí me provocaba llorar después de tanta ilusión. Eso es terrible. Sin embargo, Sandra se mantuvo firme ahí con nosotros y cuando volvió a salir la oportunidad, cuando nos registramos nuevamente, yo no podía creer que fuera así de fácil. Para nosotros la vida llevaba años de ser muy dura y yo francamente ya dudaba de que algún día volviéramos a tener algo.”



De la vida en la vereda solo le queda un pesar que sigue muy presente: por cuestiones de distancias no ha podido ayudar a Daysi Fabiola, su hija mayor, para que sea parte de las víctimas reconocidas del conflicto. Pasó que desde que su padre logró rescatarla de la guerrilla, el día que se la llevaron, con apenas 16 años, huyó a Cali y no quiso volver de puro pánico cerca de donde estaba su familia. La escasez de recursos y el posterior desplazamiento de sus padres, los alejaron durante años y no ha sido fácil tener un contacto frecuente. Respecto a esta situación, Valeriano abriga la esperanza de que el mismo apoyo que él ha recibido de este Gobierno, alcance en un futuro no muy lejano para que a su hija la cobije también la justicia.

## La felicidad de ser para otros

Valeriano ahora confiesa que cuando le “llegó la suerte” de este apartamento ya no quería saber de sorteos. Le daba miedo volver a sentir esa pesadumbre al salir del evento sin nada. De tragarse la ilusión. Un día pasaban por la oficina donde se registraban los aspirantes a vivienda gratuita. Su esposa le insistió que se inscribieran. “Entramos porque vimos a un amigo que estaba ahí. Fue tan fácil el proceso que, como le digo, yo creí que no iba a salir nada”.

Ya se había olvidado de la aspiración el día en que le llamaron a decir que había salido favorecido con una vivienda. Habían pasado cuatro meses. No lo podía creer. Sólo pudo pensar que fue una bendición.

Ahora otra cogestora está a cargo del acompañamiento al hogar: María Eugenia Tautas. El hogar ha avanzado hacia otra etapa en la ruta para dejar atrás la pobreza. Podrían ser promovidos dentro de poco porque tienen una vivienda propia y las condiciones de vida de la familia, como la de cada uno de sus miembros, ha mejorado visiblemente alejándose de la pobreza extrema en que estuvieron en los momentos más difíciles de sus vidas. Si bien no es que naden en dinero, hay unos ingresos que les permiten llevar la vida con

dignidad. El padre trabaja en su taller de mecánica, la madre reparte sus horas entre la atención del hogar, la ayuda en el cuidado de su nieta y la venta de perfumería por catálogo; y Angie Paola, la hija que pronto cumplirá 21 años, tiene un trabajo que le permite, con el apoyo que tiene de sus padres, cierto margen de ahorro con el que espera poder retomar pronto sus estudios universitarios de Contaduría. En cuanto a la vivienda, se perciben las diferencias con otros hogares que todavía están en sus primeros pasos para apartarse de la pobreza. Pero este hogar como tal vez muchos otros tiene una ventaja: la fuerza del amor evidente que los une y los impulsa cada día a trabajar por mejorar cada vez más sus condiciones.

Valeriano recorre con la vista su pequeño apartamento. Empieza a contar cómo todas las mejoras que le ha hecho han sido fruto de la habilidad de sus manos: las aplicaciones de madera tallada que reviste las esquinas y cornisas. El piso de cerámica. Algo de muebles en la cocina. Una estufa con horno. Un ambiente en el que se sienten a gusto.

Su voz y ademanes recuperan el ánimo al hablar de su nueva vida. Reaparece la emoción en el tono. Por el momento, él ha encontrado un nuevo lugar en este territorio urbano que al principio le resultó tan áspero. Este Pasto de ahora se asemeja a un hogar. Sobre todo porque las condiciones que han ganado parecen indicar que ya están cerca de hacer parte de los miles de familias que han superado la pobreza extrema en esta capital, donde la pobreza multidimensional bajo del 28,1 por ciento en 2010 al 11,4 por ciento en 2017.

Valeriano ha recuperado su espíritu de líder y encabeza la organización de su comunidad para afrontar las obligaciones de la vida en propiedad horizontal. La Estrategia Unidos les ha venido mostrando y enseñando cómo vivir en este nuevo ambiente y con el acompañamiento comunitario. Es un modelo de intervención (U100) orientado a hogares y comunidades de los conjuntos de vivienda gratuita. Los capacita con herramientas



de gestión para resolver los problemas de la colectividad. No son pocos y no son fáciles. Pero él se siente optimista.

De su hija habla con orgullo porque dice que su saber de tres semestres de Contabilidad los ha ayudado mucho en el recién fundado Consejo de Administración de la copropiedad. Se ha ganado el respeto de sus vecinos y ha logrado conformar un equipo de trabajo comprometido que ahora asiste puntualmente a las reuniones.

La familia respira hoy tranquilidad y eso se nota cuando Valeriano, como si evocara esa historia difícil que le tocó como a tantos colombianos durante las épocas más duras del conflicto en el país, sentencia:

“A nosotros no nos han dejado armas para que nos defendamos, sino llaves para abrirle el futuro a nuestros hijos con buenos mensajes, no con problemas. Los problemas tenemos que dejarlos allá, donde se quedaron. Acá tenemos que hacer otra vida, comenzar de nuevo”.



Luz Estrella Tobón y  
Yenifer Pulgarín:

Dos historias de derrota a  
la pobreza extrema

Luz Estrella Tobón es hoy líder de Más Familias en Acción en Medellín. Pasó de ser una víctima del desplazamiento por la violencia a ser una mujer independiente y una próspera empresaria del sector de la confección. Para Yenifer Pulgarín, el recurso, sea cual fuere el nombre, permite potenciar el sueño de estudiar Ingeniería de Sistemas. Ese proyecto parecía casi inalcanzable por las condiciones económicas de su hogar.

El hogar de Luz Estrella debe certificar la asistencia a controles de salud y mínimo el 80 por ciento de asistencia a clases. Así lo deben hacer también las 2,6 millones de familias beneficiadas actualmente en el país. De igual manera, Yenifer y los más de 431.000 jóvenes en acción de 98 municipios, que han recibido el acompañamiento del programa desde sus inicios en 2012, tienen que asistir de manera regular a su proceso de formación y aprobar y avanzar en el plan de estudios, entre otros requisitos.

## Las historias

“Es mejor que anochezcan y no que amanezcan”. Fue un aviso difícil de ignorar viniendo de un jefe guerrillero. Estaban en Montecristo, vereda de Samaná, uno de los municipios de Caldas a los que les tocó la mayor intensidad de la guerra. Allí habitaban Luz Estrella, su esposo Bertulfo y sus tres hijas, pequeñas todas en ese entonces: Francy, Marina Paola y Francedys.

El frente 47 de las Farc había surgido en el vecino departamento de Antioquia, en territorio compartido por los municipios de Argelia, Nariño y Sonsón. Se extendió hasta Samaná y llegaron los cultivos de coca, las desapariciones y los homicidios. El municipio está más abajo del Magdalena Medio y es casi un mirador del valle de ese río. Allí llegaron en la década de 1990 los paramilitares que, bajo el mando de Ramón Isaza, habían dominado los alrededores de La Dorada. Quedar en medio de los grupos armados convirtió a Samaná en un municipio de víctimas: cerca del 90 por ciento de su población fue afectada.

La amenaza del guerrillero los desterró. No dudaron en salir apenas con la ropa que les cupo en una pequeña maleta. Las hermanas de su esposo los acogieron la madrugada del 17 de octubre de 2006. Ese día llegaron al barrio Belén Zafra, en la Comuna 16 de Medellín, uno de los sectores más tradicionales de la ciudad. Engrosaron la población de 160.000 habitantes de la zona y con







mucho esfuerzo, consiguieron los cupos para que las niñas pudieran estudiar en la escuela Horacio Muñoz Suescún.

Apenas aguantaron tres meses en la casa donde les dieron asilo. Luz Estrella fue criada con ese orgullo paisa que no permite vivir de la caridad. “Aunque sea con la familia, vivir de arrimado es muy duro. Por eso nos conseguimos un cuarto en arriendo y con la ayuda de la Cruz Roja y de la Unidad de Atención y Orientación a las Víctimas (UAO) conseguí el plante para empezar mi negocio”, dice.

La guía de la UAO le permitió conocer a Familias en Acción. “Al tiempo que empecé a recibir el apoyo del programa para la salud y educación de mis hijas, inicié también estudios en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Aprendí a manejar máquinas de confección: plana, fileteadora y recubridora. Empecé mi negocio por lo más básico: vendiendo hilos, agujas y todos los productos de confección y hace cuatro años empecé a cumplir el sueño de tener mi propia empresa: me compré mi primera máquina. Hoy tengo seis que he venido pagando a crédito”.

Fruto de su trabajo, hoy tiene casa propia. Son tres pisos en el barrio Belén Los Alpinos. En el segundo piso funciona su empresa de confección. A pesar de ser la dueña, trabaja a la par de todos compartiendo el saber que aprendió en sus cursos, en las empresas en las que fue empleada, y en las que aprovechó también la oportunidad para darse a conocer.

Hoy, con su empresa genera empleo para ocho familias. Confeccionan blusas, vestidos y pijamas para dos grandes almacenes de Medellín. Producen cerca de 1.000 unidades al mes. Pueden ser 2.500 si hay muchos pedidos. Aunque Luz es estricta, el hecho de haber padecido muchas circunstancias adversas inspira más su sentido social y la hace ser una mujer equitativa con sus empleados.

“Yo también soy desplazado y ella nos ha ayudado mucho; es una excelente patrona”, cuenta José

Arley Tobón, quien trabaja con ella hace cuatro años. Es el encargado de entregar los pedidos y también, por demanda, opera la máquina que le asignen según las prendas que haya que terminar.

Su trabajo como empresaria no le ha impedido seguir desarrollando una labor altruista. Hace un año es madre líder de Más Familias en Acción, rol en el que hace reuniones periódicas con las madres titulares para contarles las novedades del programa, así como ofertas de cursos y programas nuevos que puedan aprovechar. Esto le exige tiempo adicional, pero con gusto lo emplea para multiplicar lo aprendido en las charlas motivacionales que, entre otras cosas, le han servido para ir dejando atrás su timidez, una de sus grandes debilidades, según confiesa.

Luz cumplió su meta de brindarle lo mejor que pudo a sus hijas. Después de arrancárselas a la posibilidad de la guerra, logró darles estudio y el ejemplo que sale de un hogar amoroso. Francy, la mayor, consolidó su familia en los llanos, vive en Guamal con su esposo y sus hijos. Marina Paola, la segunda hija, sigue los pasos de su madre y trabaja en la empresa de confección y Francedys, la menor, está terminando Administración de Empresas. Con el apoyo de Jóvenes en Acción estudió el tecnológico de la misma carrera en el SENA, el cual fue fundamental para avanzar en sus estudios universitarios. “Si no hubiera tenido el incentivo de Jóvenes tal vez tendría que haberme retirado porque mis papás no podían pagar mis gastos de transporte y fotocopias, incluso pude ahorrar para comprar mi propio computador”, cuenta Francedys.

“Para mí Más Familias en Acción ha sido espectacular; hoy sigo recibiendo el incentivo de salud por mi hijo Alejandro de 7 años; es un apoyo que bien aprovechado lo saca a uno adelante; o si no, mire a dónde voy: ya no soy empleada, tengo mi propia empresa y sigo pa’ lante. La idea es saber valorar lo que le dan a uno, saberlo administrar y destinarlo para el futuro de los hijos y de la familia”, concluye Luz Estrella.

Este programa fue elevado a Ley de la República en 2012, fruto de un proceso de rediseño que lo transformó en “Más” Familias en Acción. El cambio de nombre es algo más que mera forma. Resulta que en su tercera fase, implementada entre 2012 y 2013, fue reorientado para reducir las brechas entre lo urbano y rural, aumentó la cantidad del incentivo en las zonas más pobres e incrementó los recursos correspondientes a educación, según el grado escolar, para fortalecer la permanencia en secundaria.

## Cuando los sentidos se viven diferente

Cuando Yenny Candelo tenía cuatro meses de embarazo fue afectada por una rubeola que ocasionó que su hija Yenifer naciera sorda. “Aunque esto nos generó angustia, no fue un factor que la hiciera diferente para nosotros. Siempre la tratamos igual que a sus dos hermanos”, cuenta Yenny, quien trabaja independiente en su salón de belleza en el barrio La Graciela en Dosquebradas.

Dosquebradas es un municipio de Risaralda, muy cercano a la capital del departamento. Es uno de los municipios con mayor aumento de población en los recientes 10 años y parte del Área Metropolitana de Centro Occidente, uno de los principales centros industriales del Eje Cafetero colombiano. Como municipio, no ha completado el medio siglo de vida, pues hasta 1972 era un corregimiento de Santa Rosa de Cabal.

La vereda en donde vive está al otro lado de Pereira. El tiempo que recorría se sumaba a las largas jornadas de estudio de los muchachos, generando a la familia gastos adicionales que no alcanzaban a solventar. Decidieron mudarse a Dosquebradas.

Yenifer supo de Jóvenes en Acción mientras realizaba estudios de Mantenimiento de Computadores y Redes en el SENA. Este programa fue creado en 2012, vinculado al rediseño de Más Familias en Acción. En ese entonces, el Gobierno identificó que al salir del bachillerato los hijos de estos hogares veían interrumpida la continuidad



en la formación que venían acumulando con MFA. En respuesta a esta situación, nació JeA: para apoyar a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, con la entrega de transferencias monetarias condicionadas que les brindan apoyo para continuar sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales.

El programa ha acompañado desde entonces a más de 431.000 jóvenes en el país, de los cuales 14.500 son de Risaralda. Hay 5.644 de ellos estudiando en la Universidad Tecnológica de Pereira Y hay una Yenifer que justo cursa allí Ingeniería de Sistemas.

Para Yenifer ser una persona sorda nunca ha sido impedimento para conseguir sus objetivos. El no oír ni hablar de forma fluida, no la ha opacado nunca; brilla donde llega y siempre está en función de ser cada día mejor. De eso hablan quienes la conocen.

Decir que el reto es mayor para ella es una perogrullada. Desde inicios del siglo XX el país ha dado discusiones sobre la garantía de derechos

a estudiantes con sordera y recientemente el Ministerio de Educación Nacional ha reglamentado el reconocimiento de intérpretes de señas para mejorar la educación inclusiva de personas con discapacidad auditiva. Pero el camino no está completo.

No han sido pocas las veces que Yenifer ha tenido que llenarse de paciencia para entender algunas cosas. “Puedo tener algunas dificultades en materias como programación, por términos o señas que pueden ser difíciles, pero me siento bien en mi carrera; me gusta la tecnología y ahí voy a seguir”, dice. Resalta el apoyo de sus compañeros, con quienes se comunica con notas escritas en hojas de cuaderno.

No sólo de ingeniería se alimenta su proyecto de vida. En 2012, cuando apenas se armaba JeA, fue nominada como Mujer Progreso, distinción que entrega la Alcaldía de Dosquebradas como reconocimiento a mujeres destacadas en diferentes ámbitos. Luego en el 2017, participó y ganó en 2017 el Reinado Nacional de la Belleza para Sordos, que



tenía entre sus premios una beca para estudiar modelaje.

Lo del modelaje había sido aplazado desde el 2012, cuando tuvo que aceptar su imposibilidad de ingresar a una academia porque los costos se salían de su presupuesto. Esta meta, que ya puede marcar como cumplida, le alimenta sus habilidades naturales en expresión corporal y pasarela. Sobre el certamen resume: “Éramos nueve concursantes, finalmente seleccionaron tres: Risaralda, Antioquia y Atlántico. Y yo me traje la corona”. Dice que desde este rol quiere apoyar a la comunidad sorda, para que “se empiecen a abordar espacios de inclusión y para sensibilizar al resto de la sociedad”.

La admiración que despierta comienza desde su intérprete de señas en la universidad: Josué Manosalva, quien es también uno de sus más grandes amigos: “Es una mujer muy intrépida, muy despierta, a ella no hay que empujarla para que haga. La conocí cuando ella tenía 14 años. Me abordó para contarme que quería bailar, que la ayudara, y contactamos a una academia de la Alcaldía en donde yo trabajaba en ese entonces. Ella ha sido un impulso, incluso para mí”.

Y es que otra de las grandes pasiones y virtudes de Yenifer es el baile. Amante del Hip Hop, ha participado en eventos internacionales en Medellín y otras ciudades. No oír no le impide sentir la música. “Puedo sentir las vibraciones, me imagino cómo la música está recorriendo el espacio y trato de vivirla y de significarla también. Me encanta el baile”.

Todos estos intereses y ganas de destacarse siempre, no le han quitado el tiempo para dedicarse a su carrera. Trabaja en el campus, la biblioteca o la cafetería durante jornadas que pueden durar hasta las horas de la noche. No obvia en su relato el apoyo de Jóvenes en Acción, porque las condiciones económicas en el hogar no son fáciles y sin el incentivo del programa no hubiera podido seguir estudiando.

Según la última Evaluación de Impacto realizada en diciembre de 2017, el programa ha permitido reducir en 33 puntos porcentuales la posibilidad de que los participantes se retiren, lo cual representa una caída del 40 por ciento en la probabilidad de desertar. Los 400.000 pesos que recibe cada dos meses por su asistencia y avance en sus logros, le sirven a Yenifer para complementar la mesada del hogar y solventar los gastos universitarios, entre ellos el que implican un refrigerio para aguantar esas largas jornadas de estudio, algo que antes no podía hacer.

También como un complemento académico, Yenifer ha tenido la oportunidad de tomar los talleres de Habilidades para la Vida que potencian aspectos de su proyecto a futuro: autoconocimiento, perseverancia, gestión de conflictos, comunicación asertiva, adaptabilidad - empatía, toma de decisiones y actitud en el trabajo.

“Seguramente sin todo este apoyo ya no estaría en la universidad. Ahora tengo garantizado el alimento, el transporte y me puedo enfocar en el estudio. Estoy cumpliendo mi meta de estudiar lo que siempre quise, ir cumpliendo poco a poco mis metas y representando siempre con orgullo nuestra identidad de personas sordas y la lengua de señas”, concluye.





Ganó la vida: Breiner y su familia ahora están en su tierra



Es la vereda El Cedral, en Quinchía, un municipio de Risaralda montado en la cordillera occidental de Colombia. Allí nació hace 36 años, Breiner Antonio Ladino. Él hace parte de una comunidad de menos de 500 habitantes cuya economía depende del café, la yuca y el plátano. La versión resumida, diría que esta es una historia de vida marcada por la valentía que caracteriza a los risaraldenses, el amor por la tierra, y cómo reponerse a los estragos de la violencia que azotó a muchos colombianos en el campo. Breiner es el protagonista de las páginas que siguen, en las que se despliega una versión menos corta.

“Yo soy un campesino”, dice orgulloso. Habla de sí mismo como un hombre trabajador que, aunque solo pudo estudiar primaria, se hizo responsable gracias al trabajo que empezó a ejercer desde temprana edad en la finca de su padre y fincas vecinas.

En medio de lo que hoy es su cultivo, abonando los palos de café con los que crece su expectativa de mejores condiciones de vida para sus hijos, este hombre delgado, de mediana estatura, tímido por ratos, reservado la mayoría del tiempo, considera que la violencia en el país, todos sus episodios de dolor y el miedo que sintieron, los obligó a ser más fuertes y a tener el empuje del que hoy da testimonio.

## El desplazamiento forzado

La situación en Colombia obligó a miles de familias a dejar lo que habían construido, abandonaron lo máspreciado, su tierra, para irse a explorar a las ciudades, algunos solo con la ropa que tenían puesta, vestidos de tristeza, rabia y zozobra. Somos un país de víctimas: son más de 8 millones de personas registradas en esa condición. Las estadísticas de la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas muestran que la mayoría ha sufrido el desplazamiento forzado, el homicidio y la amenaza. “En 2003, en todo el municipio solo escuchábamos hablar de muertes por todo lado. Era aterrador. Vivíamos en la casa

de mi padre y tuvimos que presenciar el asesinato de mi cuñado. El miedo nos sacó huyendo”, expresa. Ese año en que mataron a su cuñado y a varios vecinos, Breiner y su familia decidieron buscar refugio en Pereira. Salió de casa con su hijo Arlex de Jesús -que tenía casi un año- y su esposa Consuelo. Pensaron que jamás regresarían. “Nos despedimos de los que quedaban, porque muchos ya se habían ido”, recuerda. En Pereira no les esperaba nadie. Apenas cargaban la vida y una maleta.

En las noticias se hablaba de amenazas, episodios de violencia con víctimas letales y desplazamiento forzado de campesinos de la zona. Hasta entrados los noventa, el Gran Caldas, región que integran Risaralda, Quindío y Caldas, parecía vacunado contra las dinámicas de la guerra y se promocionaba como ejemplo de calidad de vida y necesidades básicas satisfechas según la medición de bienestar y de pobreza de la época. Sin embargo, la crisis cafetera, el ingreso de los grupos armados, el empobrecimiento rural y todos los ingredientes del conflicto transformaron el escenario a partir de 1990.

De la ecorregión del Eje Cafetero, pudo ser Risaralda a la que peor le fue en la guerra. Al menos eso indican informes universitarios y de organizaciones que han mostrado cómo pasó a ser, desde mediados de los noventa hasta entrada la primera década de este siglo, uno de los departamentos donde se vivió con más fuerza el conflicto, convirtiendo a cerca de 120.000 personas en víctimas.

A Quinchía primero le cayó la roya, afectando lo que en la década de los 70 era una zona cafetera próspera. Luego le cayó la guerra, cúspide del horror: más de 1.000 personas se desplazaron del municipio entre 2003 y 2004. El Cedral, como muestran los registros y la historia de Breiner, puso sus muertos, sus desplazados y sus miedos.

En Pereira, Consuelo fue a vivir a la casa de un tío en el municipio de Dosquebradas, llevándose con



ella al pequeño Arlex. Breiner tuvo que desplazarse continuamente entre las fincas de la región y sus alrededores para buscar posada y empleo para mantener a su familia.

“Fue una época muy difícil; entre la distancia, la situación económica y el temor continuo, pasamos cerca de tres años de un lado a otro”. A pesar de todo, en uno de esos encuentros los fines de semana con su esposa, que era el único tiempo posible para estar juntos, “encargaron” a Brayán Alexis. “Usted se imaginará, cuando supimos que estábamos esperando un hijo... no fue fácil”. Ella se quedó sin trabajo y aunque la situación se complicó, el recién nacido fue la mejor excusa para buscar la forma de volver a vivir bajo el mismo techo.

Breiner y su familia -ahora de cuatro integrantes- estuvieron primero en una finca cultivando plátano y luego en otra dedicada al café. Por fin lograron llegar a lo que sería su hogar durante los siguientes tres años. “Nos recibieron y pudimos estabilizarnos. Yo cultivaba banano bocadillo y mi esposa se dedicó a la postcosecha, empacándolos. Nos fue tan bien que logramos enviar dinero al pueblo. Nos estaba empezando a sonreír la vida”.

## Retornar no es solo volver a su tierra

A través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y de la Unidad de Víctimas, el Gobierno Nacional creó el programa Familias En Su Tierra (FEST). Esta iniciativa buscaba que los hogares víctimas del desplazamiento forzado pudieran retornar a sus tierras o vivir de nuevo en la ruralidad, a través de una intervención integral.

Así, se puso en marcha el único programa en el país que actualmente atiende de manera integral a la población víctima. Es un modelo rural que beneficia hogares que han sido desplazados con acceso a alimentos para autoconsumo a través de la implementación de huertas caseras, fortaleciendo capacidades en técnicas de producción, sostenibilidad y mejoramiento







de hábitos saludables, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, la generación de ingresos a partir de la creación o fortalecimiento de proyectos productivos, son sólo algunas de las bondades del programa. Un programa para volver a la tierra. El programa soñado.

“En octubre de 2009 nos enteramos que se había acabado la violencia en el pueblo y decidimos volver. Las noticias decían que ya no estaban los que sembraban el terror en Quinchía”, cuenta Breiner. Era tiempo de volver. Sus ahorros y el dinero que había hecho, le ayudaron a construir una casa.

## Familias En Su Tierra, una oportunidad para lograr estabilidad

En esa misma época le informaron que había sido inscrito y admitido para el programa Familias En Su Tierra. “Un amigo en la calle me dijo que en la Alcaldía aparecía mi nombre. ¡Hasta me asusté!”, dice, porque aparecer en una lista -años atrás- era motivo de terror.

Participó en capacitaciones y talleres motivacionales, actividades con enfoque reparador y reconocimiento de logros. Luego, recibirían apoyo para lograr su estabilización socioeconómica. En 2014, con el incentivo de seguridad alimentaria, fortaleció la huerta que ya tenía y en la que hoy cultiva cilantro, lechuga, repollo y cebolla larga.

En ese mismo año, también recibió un incentivo de hábitat con el que amplió y mejoró su vivienda. Su sueño es terminarla con el fruto de su trabajo y el apoyo de todos los miembros de la familia. Ahora Breiner cuenta con una hectárea de terreno en el que tiene cultivados 5.000 palos de café y 400 plantas de plátano. Realizan las labores de la huerta en familia: ahora son seis. La mayoría de la producción es para el autoconsumo. Algunos excedentes del cultivo de café sirven para el intercambio con vecinos.

El 24 de septiembre de 2015 recibió los recursos para fortalecer su idea productiva y con este compró abono y 1.000 plantas. Recuerda que cuando iniciaron la producción recibían 250.000 pesos mensuales. Con el apoyo de FEST y el

esfuerzo de toda la familia han llegado a obtener mensualmente cerca de 1.200.000 pesos.

Hoy, Breiner está a punto de celebrar 18 años de matrimonio con su esposa Consuelo y es padre de cuatro hijos: Arlex de Jesús de 16 años, Brayan Alexis de 14, Andrea Michelle de 8 y Milán Carolina de 6 años. Y es una de las 76.000 familias de 147 municipios en 21 departamentos del país que hacen parte de FEST.



# Si amanece en Cauca





Uno presume que desde ahí arriba se ha visto todo. En ciertos momentos del día, y cuando las nubes no lo cubren, El Diviso se puede ver desde el pie del pico del que parece estar suspendido. Si está anocheciendo, las luces artificiales de decenas de viviendas comienzan a verse en la cima, incluso desde el inicio de la carretera que escala esta parte de la montaña. Desde Argelia, municipio del sur del Cauca amurallado por la Cordillera Occidental, más que por una carretera, los vehículos parecen subir una escalera de arcilla y lodo, contoneándose y evadiendo el abismo en cada curva. Son varios kilómetros de cuesta. Y de todos los cerros que se elevan como pináculos por encima del nivel de Argelia, el que sostiene El Diviso parece el más alto.

Con luz y sin nubes ni neblina se ven los matices de verde en la serie de montañas. Hay un entramado de plantas de tono oscuro tradicional de estas pendientes. Es una variedad de cultivos de café, naranja, aguacate. De otro verde más claro, incluso con algún viso brillante, las cuadrículas de cultivos de coca. Alguien maneja una camioneta entre todo esto. ¡“Medardo!”, le grita la pasajera de adelante. El platón, cubierto con una carpa, y la cabina, no cargan ni una hoja de coca. No cabría una sola hoja. En todos los espacios posibles vienen panales de huevos. Ha de haber unos 1.800 huevos en 60 panales que los protegen del vaivén. Vienen de los galpones de la Asociación de Mujeres Agroindustriales, Pecuarias y Ambientales del corregimiento El Diviso llamada Asomucadi.

Al lado del conductor viene Ana Lucía Hoyos. La barriga de estos meses de embarazo casi pega en la guantera de la camioneta, mientras ella bromea con que el zarandeo del viaje la va a hacer parir prematuramente -a su futura Sara- uno de estos días: alguno de los dos días a la semana que baja con el cargamento de huevos para surtir graneros y tiendas en la cabecera municipal. Ana Lucía es la vicepresidenta de Asomucadi. Se integró en 2016, cuando regresó de Caldas (Antioquia), después de estudiar Tecnología en Producción Agropecuaria. Vino a trabajar el campo en este corregimiento

fundado -cuenta ella- por su bisabuelo Salomón Hoyos. Coincidió con la mudanza de su hermana Martha, una de las fundadoras de la Asociación, quien se fue a Popayán para garantizar mejor educación para su hijo pequeño.

Martha y otras seis mujeres de la zona rural de Argelia capitalizaron en 2011 un primer ejercicio de trabajo con el Estado para inaugurar un proceso inédito en relación con lo que estos territorios vivieron hasta los recientes años. Las siete participaron del programa Mujeres Ahorradoras en Acción, de Prosperidad Social. Había otras 38 agricultoras de las veredas Lusitania, El Diamante, La Guinea y la cabecera corregimental de El Diviso, pero ellas siete se asociaron.

El proyecto es mítico por lo sobresaliente e histórico. Ahora son 24 mujeres integrantes de la asociación, con reconocimiento internacional por sus logros colectivos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) ha publicado sobre ellas en este tono: “El país hoy más que nunca necesita que historias de empoderamiento económico y social como las de Ana Lucía y Asomucadi sean las que se repliquen por toda Colombia”.

## Algo va de Cauca a Cauca (i)

Uno presume que desde ahí arriba se ha visto todo. Cada pináculo de este cordón de montañas cuenta con miradores naturales y cada curva abre una panorámica que deja ver al fondo -hacia el oriente- la Cordillera Central, más allá del valle del Patía. El valle se estrecha a medida que el río corre hacia el sur, poco antes del Nudo de los Pastos, donde las dos cordilleras se unen -o se separan, dependiendo de la dirección que se tome-. Poco antes, en su camino al océano, el Patía se habrá desviado por la Hoz de Minamá, cortando la cordillera occidental y separándola en porciones entre Cauca y Nariño.

Del otro lado del valle está El Bordo, el pueblo natal de Enar Julián Galindez. Quizá sería su residencia actual si su padre, Enar Galindez, no hubiera

tenido que huir hace 18 años, cuando la presión de la guerrilla para que le prestara servicios de transporte lo sacó de ahí. Vivir bajo presencia de un grupo es duro, pero tener la presión de varios es insostenible. Se fue a Popayán con su esposa Mirella -entonces embarazada de Vanessa- y el chico Enar Julián, de 5 años.

Quizá Enar Julián estaría todavía en El Bordo, aunque sufriendo del calor que dice no soportar. O quizá su camino en la música lo hubiera llevado de cualquier forma al programa de la Universidad del Cauca en el que ahora estudia con apoyo de Jóvenes en Acción.

Ya había arrancado su formación gracias a las lecciones de su padre. Taxista para sobrevivir, Enar (padre) alimentaba sus emociones interpretando la guitarra y el bajo que aprendió a tocar de forma empírica. Esa manera de vivir se la heredó al hijo. El oficio de taxista se quedó en El Bordo. En Popayán se dedicó a la mecánica. Mirella es estilista. Vanessa, la única payanesa de los cuatro, acaba de terminar la escuela con apoyo de las transferencias de Más Familias en Acción y aspira ingresar a la facultad de Humanidades de la Universidad del Cauca.

Y Enar Julián vive música. Todo en su vida tiene que ver con música: sus hábitos, sus estudios, su trabajo alternativo, su diversión y sus planes futuros. De otra manera no interpretaría seis instrumentos: trompeta, trombón, piano, batería, bajo y guitarra. O siete, si deja de negar su buen manejo de la flauta, que le parece aburrida. De otra manera no cantaría ni daría esas serenatas con las que a veces consigue recursos extra para los instrumentos y los repuestos. Y no estaría trabajando en su proyecto musical con canciones inéditas. Ni arrancando el último año de carrera y gestionando su viaje de intercambio a la Universidad de San José, en Costa Rica, para conectar con una maestría y con un maestro del que espera nutrirse.

También su relación con Prosperidad Social responde a la música. En otra crónica de esta

publicación se le menciona y cita como integrante del proyecto Amanecer, especie de himno de la lucha contra la pobreza que produjo Prosperidad Social; y es compositor del lema cantado del programa Jóvenes en Acción: “Eso salió de una de las clases vinculadas a programa, una de habilidades para la vida. Yo llegué tarde porque apenas salía de las clases de la universidad, entonces la profesora del taller me propuso compensar la ausencia con un ejercicio creativo”. Todo en las conversaciones con Enar Julián tiene que ver con música. Incluso en sus horas extra, que invierte dictando clases particulares a dos niños y tres adultos en distintos barrios de Popayán.

Mucho va del Cauca rural de Asomucadi al urbano en el que vive Enar. Ambos son escenario -casi alegórico- de las contradicciones del país. Con Popayán en el centro, fue uno de los epicentros económicos y políticos del país hasta que se agotaba el siglo XIX. El siguiente siglo erosionó esa riqueza, ahora apenas museificada en el centro de su capital, que vive muy por encima de las condiciones de sus periferias. En Popayán, la pobreza multidimensional fue estimada en 8,6 por ciento para 2017, muy por debajo el 17 por ciento nacional. Pero en todo Cauca, esa medida de pobreza llega a 29,5 por ciento. Así un país con grandes brechas entre la ciudad y el campo se expresa perfectamente aquí, uno de los departamentos con mayor cantidad de población en zonas rurales. Y se expresan los impactos de la guerra en el campo: tiene más de 250.000 víctimas registradas.

Cauca tiene la segunda mayor concentración de población indígena - solo después de La Guajira- y tiene el quinto mayor porcentaje de personas afrodescendientes. Contiene aquel cliché nacional sobre gozar de todos los pisos térmicos y la riqueza ecosistémica. Aquí se puede describir el todo nacional desde una de sus partes. Y sí, son todos los problemas y todo el potencial.





## Argelia, antes la guerra

En los albores de esta década e inicios de este gobierno, el Estado apenas comenzaba a llegar a estos picos y montañas que encajonan a Argelia, mientras, incluso en su epílogo, el conflicto se concentraba en Cauca. Con mayor o menor intensidad, este ha sido escenario de casi todas las guerras nacionales. No hay un grupo armado ilegal en la historia reciente de este país que no haya golpeado con su prontuario a los habitantes de este departamento, especialmente a los del sur; y principalmente a estos que han poblado estos territorios montañosos. La violencia creció en las recientes décadas, cuando se convirtieron en corredores del narcotráfico.

La zona rural de Argelia sirvió a esos propósitos a las desarmadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN). Es uno de los ocho municipios caucanos con mayor impacto de la violencia -apenas comparable con Villa Rica, Caloto,

Toribío, Corinto, Miranda, El Tampo y Guapi-. Después de décadas de dominio por parte de esas dos guerrillas, los grupos paramilitares entraron a disputar el control. En 2002, toda la región del Patía veía a los capos extendiendo su poder militar, económico y político.

Poco después, la Fuerza Pública comenzó a recuperar -o intentar hacerlo- el monopolio legítimo. Instalaron estaciones o bases en El Plateado, El Mango, Puerto Rico, El Sinaí y Argelia. De hecho, en El Diviso comenzó a funcionar una estación de Policía. La desesperación por la guerra total fue tanta sobre la gente, que en algunos poblados pidieron la salida de las fuerzas del Estado para evitar sufrir ataques de los grupos ilegales.

Este corredor integrado del valle del río Patía y de estos altos del Patía -la cúspide de la Cordillera Occidental- son la conexión con la zona rural de López de Micay, entonces, también con el Océano Pacífico. Desde aquí, desde este pico del que se agarra El Diviso, se ve el río San Juan



de Micay, que forma un cañón entre Argelia y estos corregimientos y veredas colgantes de la montaña. Es la principal ruta de transporte para los narcotraficantes.

## Algo va de Cauca a Cauca (ii)

El gobernador del Cabildo de la Parcialidad Indígena de Totoró, José Fernando Conejo, sube a lo más alto del cerro para mostrar la extensión del territorio. Son más de 3.000 hectáreas donde habitan y sostienen su precolombina cultura cerca de 7.000 personas de 3.900 familias repartidas en 21 veredas. Esto es el oriente de Cauca, laderas de la Cordillera Central, a las puertas del Macizo Colombiano, cuna de la tercera cordillera -la oriental - y de los principales ríos del país.

Desde aquí, Conejo señala seis lugares sagrados: los cerros El Gallinazo, La Horqueta, El Obispo, Peñas Negras y Tres Tulpas; y la laguna La Herradura. Abajo, casi en la base de esta elevación, está lo que todavía les sirve de sede para el procesamiento de las plantas medicinales y aromáticas. Pronto se trasladará a la casa Namoi Jau Yerbabuena, para optimizar la elaboración de medicinas tradicionales, tratamientos, jabones, y muchos otros elementos vinculados a la salud del cuerpo físico y del cuerpo sociocultural de este pueblo.

Desde acá arriba también parece que se ha visto todo. Se ve la cabecera de Totoró, a un kilómetro y las zonas donde están los *Traw Misak*: esto, en la vida cuadrada de la ciudad, equivale a una gran huerta. En el universo circular de Totoró, el *Traw Misak* es un espacio de construcción cultural inseparable del sujeto que lo trabaja y habita. La conexión es también conexión con la tradición.

El *Traw Misak* de Marta Elena Sánchez es La Rosa. Para entrar -a este y a cualquier otro- hay que pasar por un ritual de limpieza. Hay que bañarse con una infusión de plantas especiales que permiten sacarse las malas energías que saturan la vida por fuera de estos territorios vinculados de buena manera a la naturaleza y su cuidado. Así, quien



viene de la vida cuadrada de las ciudades, no pasará sus cargas, sus sensaciones y sus ansiedades a las plantas.

Justo el *Traw Misak* es uno de los espacios donde el pueblo de Totoró gestiona el importante aporte de Prosperidad Social. Tiene sentido en ese orden: “El pueblo de Totoró gestiona el aporte”, porque en gran medida viene del programa IRACA, ejecutado directamente por la organización del Cabildo. Con esa ejecución, garantiza la adaptación armonizada con la cultura ancestral. Coincide plenamente con la responsabilidad institucional de consolidar un sistema agroalimentario productivo sostenible con perspectivas de generación de ingresos, pero es culturalmente pertinente, inteligente a la adaptación al cambio climático e incorpora progresivamente buenas prácticas agrícolas.

Desde acá arriba, desde donde habla el Gobernador, el pueblo de Totoró también lo ha visto todo: la llegada de los conquistadores hispanos, la asignación en el siglo XVII de derechos sobre estas tierras, el despojo posterior y sostenido durante siglos, la expropiación por parte de hacendados a principios del siglo pasado, la casi extinción de su lengua *-el nam trik-*, la lucha por la reivindicación desde la década de 1970, las tomas guerrilleras. Ahora ve los resultados de su organización y de un diálogo paritario con la Nación. “La intervención de Prosperidad Social se encuentra enmarcada en el Plan de Vida *Ton'tuna*, que busca mantener vivas y fortalecidas la cultura, la lengua, creencias, tradición oral, las formas de alimentarse, las normas propias, la autoridad y todos los aspectos que forman parte del mundo Totoroez”, explica Conejo.

## De nuevo Argelia: ahora el café, los huevos y la autonomía

La camioneta cargada de huevos parece irse de trompa, cuesta abajo, hacia el río San Juan de Micay. Con pericia, baja hasta su estrecho valle

para luego atravesarlo por el único puente que hay en kilómetros a la redonda. Luego lo bordea hasta encontrarse con Argelia. Parquea en la plaza, desde la que se hace evidente lo expuesto que estaba este pueblo en medio del conflicto: está incrustado en las montañas. En estos tiempos, los cerros son privilegios para disfrutar; pero hasta hace dos años, formaban el accidente del que bajaba el peligro. En estos tiempos, cuando las Farc han firmado la paz y participan en los procesos democráticos, cuando el ELN está en tregua y la Fuerza Pública controla el casco, la plaza sirve de sala de cine, de comedero, de bebedero, de juego, de esparcimiento. “Antes ni salíamos”, recuerda Ana Lucía.

Arriba quedaron otras 22 mujeres ocupadas en diversas actividades. Las gallinas ponedoras son ahora mismo la principal fuente de producción e ingreso, pero no el único trabajo. De hecho, la Asociación ha trabajado siempre con café. Su primer nombre aludía a mujeres cafeteras y buena parte de sus proyectos futuros apuesta por la cadena de producción y comercialización de los derivados. Es la apuesta desde que aquellas mujeres ahorradoras en acción lo visionaron. “Ese programa de Prosperidad es el padre de esta asociación”, dice la fundadora Edilia Gómez.

En una lección de trabajo comunitario, juntaron los recursos -que se asignaban de forma individual- para los primeros insumos y maquinarias. Cada una siguió plantando café en su territorio para luego acopiarlo y procesarlo de forma colectiva y comercializarlo. A medida que han surgido oportunidades de proyectos financiados y buenas pistas de negocio, fueron ampliando el margen de maniobra. A principios de este año, ocho de ellas accedieron a un programa de emprendimiento económico y social que la Unión Europea ofrece para el Alto Patía y volvieron a sumar los recursos para comprar 2.070 gallinas ponedoras que colman un gigantesco galpón a unos cientos de metros del corregimiento. Otra parte importante y más antigua de su ejercicio, ha estado acompañada por el programa Familias Rurales, que Prosperidad





Social ejecuta en asocio con la FAO, y del que hacen parte 13 de las mujeres de Asomucadi.

Familias Rurales ha tenido en Cauca algunas de las experiencias más memorables de su ejercicio. Colectivos de mujeres de Almaguer, La Vega y Argelia han justificado esta estrategia para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y el desarrollo productivo con la reconstrucción del tejido social. Y hoy son algunos de los principales ejemplos frente a la comunidad internacional.

Al principio, los adjetivos locales no las bajaban de “locas”. “Van a fracasar. Eso aquí no sirve. ¿Para qué se ponen en esas?”. La confianza creció a punta de persistencia. Dos años después de la fundación, otras mujeres agricultoras ingresaron, para sumar 11. Tres años más tarde, pasaron a las 24 integrantes actuales. En toda su historia, solo dos personas han abandonado el barco. Los adjetivos, no obstante, todavía muestran residuos de desconfianza. En el parque de Argelia alguien les pregunta si el

café que comercializan es “punto blanco”, en una alusión sin pérdida en zona cocalera.

Arriba, en los espacios de la Asociación, lo más blanco son las paredes de la sede en construcción. Con cada proyecto exitoso, con cada cargamento de huevos, con cada inyección de recursos del Estado y cada financiación internacional que han recibido, han engordado esta posibilidad de autonomía económica que hoy tiene espacio propio. Se materializa en esta edificación donde estará toda la maquinaria para transformar el café en derivados, para acopiar los huevos, para trabajar en otras prácticas agropecuarias. Ha requerido unos 50 millones de pesos; gran parte resultado de la mutualidad con que asumen los proyectos de Prosperidad Social y préstamos de las socias y familiares.

“Aquí va la planta. Aquí el laboratorio, aquí el almacén”. La que señala es Edilia, mientras su esposo Albeiro trabaja en las obras. Como Albeiro,

muchos esposos, padres, hijos y otros hombres parientes de las mujeres de Asomucadi, han respondido temprano o tarde a la motivación. El proyecto ya tenía visos familiares porque las socias están relacionadas: “Casi todas somos Hoyos o Gómez”, dice Ana Lucía. Pero la incorporación de los hombres tiene también un componente de nuevas relaciones de género. Buena parte de los programas en los que participan tiene ese componente.

Arriba -y pronto- la asociación producirá arequipes, yogures, vinos. Para eso el café y los otros productos del campo que puedan ser procesados. Así será una vez que esté terminada la sede para los insumos y las maquinarias. Así será más rentable la iniciativa: “Esto está mostrándole a la gente que la producción lícita es viable y que podemos vivir de ello”, explica Ana Lucía. Desde esta sede en obra negra se ven todavía algunos cultivos de coca cuesta abajo por la montaña, cada vez menos los enfrentamientos y mucho menos las muertes violentas. Ahora, en estos tiempos cuando se despeja la neblina y si no hay nubes, desde este pico se ve perfecto el amanecer aclarando la cordillera.



A photograph of a tropical village scene. In the foreground, a dirt path leads towards a white house with a bright blue roof. To the right, there is a traditional house with a thatched roof. The scene is surrounded by lush greenery, including a large tree on the left and palm trees in the background. A blue semi-transparent box is overlaid on the upper part of the image, containing white text.

# La memoria de los gunadule se reconstruye en sus espacios comunitarios



Para la comunidad indígena gunadule hay dos cosas fundamentales. La primera, sus *sailas*, lo que por fuera de su cultura llamamos caciques. La segunda, los espacios comunitarios en los que interactúan, comparten experiencias y realizan sus fiestas o rituales. Ambos, un corazón, el centro, el significado de la resistencia y la conservación de una cultura que a lo largo de los años se ha visto afectada por el sujeto no indígena, el occidentalizado, la violencia que ejerce y el asedio de grupos armados ilegales. A través de amenazas han impartido el terror, haciendo uso inadecuado del territorio para la siembra de cultivos ilícitos. Todo esto va en contra de la cosmovisión política y el pensamiento ancestral de los guna. Todo esto, así como el abandono histórico del Estado antes del reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución de 1991, ha dejado una deuda inmensa por saldar con esta comunidad.

Los gunadule son un pueblo indígena milenario. Está casi extinto. En territorio colombiano solo quedan dos comunidades: la *Ibgigundiwala*, resguardo de Caimán Nuevo, ubicado entre Necoclí y Turbo, municipios de Antioquia, donde habitan cerca de 2.400 indígenas; y la *Maggilagundiwala*, resguardo de Arquía, en el chocono municipio de Unguía, que cuenta con una población de 800 habitantes ocupando alrededor de 2.400 hectáreas.

Son comunidades de difícil acceso, en especial la de Arquía. Para llegar allí se debe cruzar el Golfo de Urabá, el mar que le llena y el río Atrato. El viaje inicia con una hora y media en panga (lancha rápida) hasta Unguía, al norte de Chocó. Desde la cabecera hay que tomar un mototaxi, un caballo o -en el mejor de los casos- un carro, que después de 40 minutos por la costa norte nos lleva hasta esta comunidad. Justamente allí, en el resguardo de Arquía, el Gobierno Nacional decidió hace años escuchar las necesidades más sentidas y comenzar a tejer una nueva historia de conservación, reconciliación y paz. Este objetivo, que integra los lugares más apartados, lo cumple -en muchos casos- a través de Prosperidad Social.

Hasta este esfuerzo, la integración había representado occidentalización, provocando que en los recientes años niños, niñas, jóvenes, adolescentes e incluso adultos, hayan perdido apropiación por su cultura. En una gestión mancomunada con el municipio de Unguía, Prosperidad Social destinó a este pueblo cerca de 1.000 millones de pesos para la financiación de cuatro obras de impacto comunitario. La decisión de los espacios a intervenir salió de una asamblea orientada por el cacique mayor, Julio Cárdenas Campillo, hombre amable, sencillo y sabio, que da indicaciones con la mirada. Lleva siete años detrás de las decisiones más importantes de esta comunidad. Es voz, centro y corazón de los *Maggilagundiwala*.

El *saila* visionó y compartió con la comunidad su deseo de reformar los espacios sociales, educativos y productivos del resguardo. Después de una asamblea con sus hermanos, se trasladó hacia la Alcaldía de Unguía y socializó su pensamiento con el mandatario local. Así el municipio gestionó el proyecto ante Prosperidad Social.

Fueron cuatro las obras priorizadas. La primera de ellas, la Casa de Gobierno, es un espacio primordial donde se socializan las actividades, posiciones y decisiones; también se solucionan problemas internos y se realizan cánticos, fiestas y rituales. Allí asisten desde los más pequeños hasta los mayores. La Casa Grande -como también le llaman- es un espacio de resistencia y conservación cultural.

El papel de Cacique Mayor en el desarrollo de la obra fue muy importante, pues la Casa de Gobierno debe ser construida acorde con la cultura, la cosmovisión y la tradición. Fue Julio quien con base en su conocimiento ancestral proyectó la estructura y los elementos que debían ir dentro de la casa: "En principio, la propuesta del Municipio fue hacer una casa con paredes en material, pisos y techos en zinc, pero nosotros no queríamos eso, no buscábamos una casa con visión occidental sino un espacio nuevo, más amplio del que teníamos,

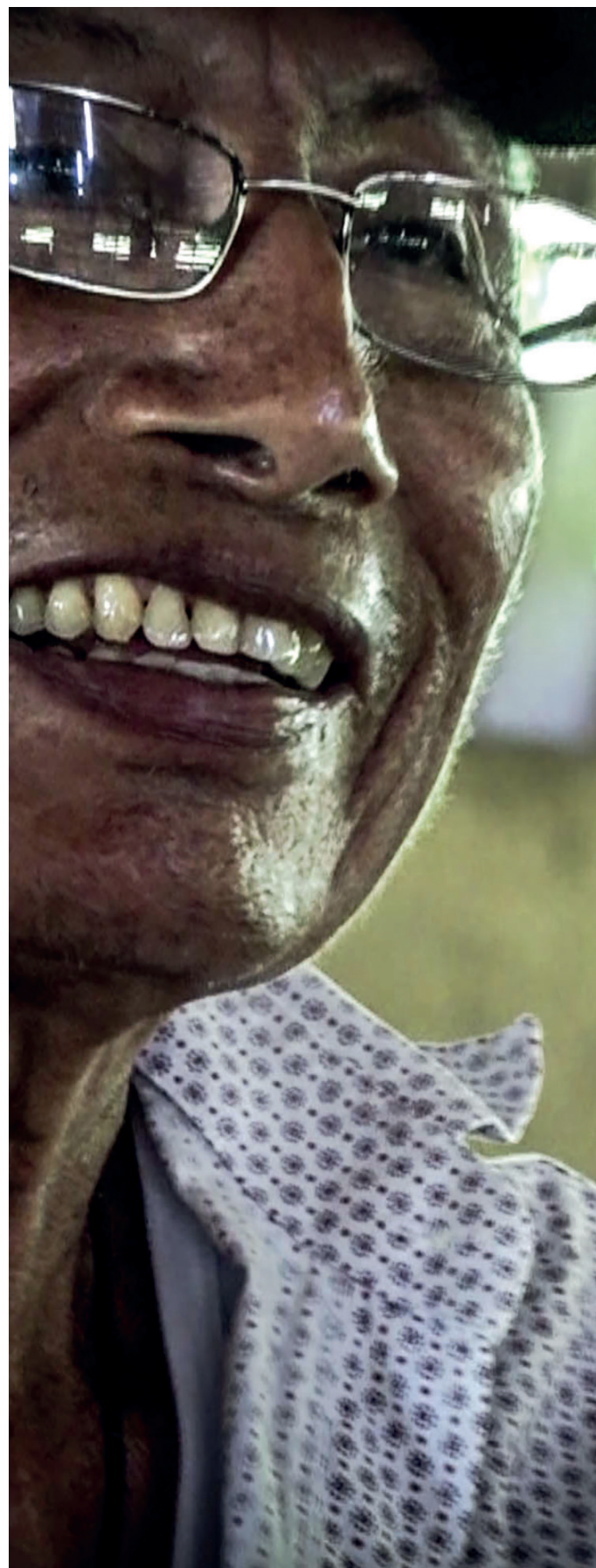
un lugar acorde a nuestras costumbres. Entre los requisitos que pedimos a la Alcaldía para realizar el proyecto fue incluir un ingeniero de nuestra comunidad que pudiera interpretar la palabra y la costumbre, y construyera estos espacios acordes a nuestra cultura”.

La Casa Grande lleva siete postes. El central simboliza el conocimiento ancestral apilado durante siglos y representado en el Cacique Mayor. Justo en el medio de la Casa hay cinco hamacas que personifican a los cinco caciques -el corazón-, quienes transmiten la historia, la espiritualidad, la cultura y orientan el conocimiento. A los lados, unas bancas laterales donde se sientan voceros encargados de interpretar la palabra de los caciques, y los secretarios designados para acompañar los procesos internos y externos de la comunidad. Finalmente, alrededor, taburetes largos donde las demás personas del resguardo se sientan a escuchar las ordenanzas, la palabra o las decisiones.

El cacique mayor se escoge a través de una asamblea. Gustavo Izquierdo, alguacil de la comunidad -una especie de “policía”- recuerda las razones por las que Julio fue escogido como el corazón de su comunidad:

“Anteriormente, estaba Aníbal, un abuelo que perdió la visión y ahora es asesor de la comunidad. Cuando hay escogencia, tratamos de reconstruir la historia de los miembros notables en la comunidad, miramos cómo transmiten sus ideas, qué tanto conocimiento ancestral tienen, qué tanto de medicina, botánica, cultura, cantos, artes y tradiciones conocen. A partir de eso decidimos como comunidad, hombres y mujeres, la persona indicada. Hace siete años vimos esa persona en Julio Cárdenas. Ha sido un buen líder: tranquilo, observador, conciliador y, sobre todo, ha tratado de llegar a los más jóvenes de formas innovadoras”.

Son decisiones tan importantes como estas las que se toman en un lugar como la Casa Grande.





Para la comunidad guna, la mujer es el origen y al igual que la Madre Tierra debe ser protegida, respetada y cuidada. La segunda obra iba orientada a generar beneficio, principalmente, para las mujeres del resguardo. Se trata de la Casa de la Mujer Artesana, un espacio esencial para la producción y comercialización de molas (textil cosido con complejos diseños autóctonos) y chaquiras. El Cacique Mayor buscaba fortalecer el desarrollo de este proceso cultural con estándares que permitieran a las mujeres concentrar sus esfuerzos para sacar adelante esta iniciativa productiva y generar nuevos ingresos.

“Toda mujer, después de hacer su segunda fiesta -cuando menstrúan por primera vez-, ya pertenece a la Casa de la Mujer Artesana. Más de 150 mujeres se encuentran afiliadas. La casa es de nuestra propiedad. Recuerdo que cuando pensamos este proyecto, el Cacique Mayor concertó con todas las mujeres cómo queríamos el espacio. Le dijimos: arriba un espacio con estibas de madera donde se diseñen las artesanías y abajo la tienda donde comercializar los productos. Actualmente, muchas mujeres trabajan desde su casa y vienen hasta la tienda e intercambiamos artículos del hogar por artesanías, así es como trabajamos”, cuenta Evelia Izquierdo, administradora de la tienda local.

Además, este espacio, sirve para realizar reuniones en las que Julio orienta y realiza trabajo comunitario con las mujeres.

La tercera obra visionada por el Cacique Mayor fue un hogar agrupado para la primera infancia; un espacio de vital importancia, pues más del 10 por ciento de la población gunadule de Arquía son niños entre los cero y los 4 años. Ya existían y se ejecutaban programas orientados a la primera infancia que no contaban con un espacio saludable, digno y seguro para esta población.

“Llega una propuesta del Estado: la construcción de un CDI. Aquí atendemos niños y madres gestantes. Somos dos docentes y manejamos 100 niños. Hay dos jornadas, una en la mañana y otra







en la tarde, los martes, miércoles y jueves. Nuestro lineamiento técnico es la política de Cero a Siempre -coordinada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)-. Trabajamos en la educación inicial, la exploración, el arte y el juego. Las guías suministradas por el ICBF son reinterpretadas con ayuda de las autoridades”, expresa Nelson Andrade, profesor del CDI.

Entre los temas que se tratan está el cuidado de los recursos naturales, la enseñanza de los sitios sagrados, las lagunas oficiales. También se enseña sobre las huertas caseras, los rituales y las fiestas.

“Yo tengo un hijo de 4 años. Para mí es importante traerlo porque no solo está aprendiendo él. Cuando llegamos a la casa me convierto yo en la profesora y sigo reforzando lo aprendido durante el día”, dice Yinetza Garrido, madre asistente al CDI.

La cuarta y última obra tuvo que ver con un aspecto fundamental para la comunidad de

*Maggilagundiwala*: la educación. El Cacique Mayor proyectó la necesidad de construir dos nuevas aulas de clase en la institución educativa Kuna Yala de Arquía y un restaurante escolar. Antes, las aulas eran transitorias, lo que incurría en costos altos de construcción cada cuatro o cinco años. Además, la población estudiantil va en aumento: a la fecha asisten cerca de 200 estudiantes.

Esta visión compartida con Edgar Ramírez, miembro y rector de la institución, pretende entregar ambientes más cómodos y tranquilos, lo que sin duda hará a los niños más felices. Esa fue una de las razones por las que, hace meses, esta escuela dejó de ser un centro educativo y pasó a ser reconocida como una institución por la Secretaría de Educación de Unguía. Este año se graduará la primera promoción -de undécimo- en que la comunidad gunadule es protagonista.

“Nosotros seguimos un modelo etnoeducativo, un proyecto educativo comunitario, realizamos la enseñanza propia de nuestra cultura, enseñamos

guna, pero también español e inglés. Dictamos asignaturas básicas como matemáticas, español, ciencias sociales, entre otras, pero las reorientamos a nuestra cosmovisión”, explica Ramírez.

Uno de los anhelos más fuertes de la comunidad educativa de Arquía es la implementación de un componente agropecuario, para que los jóvenes de la comunidad no se vayan a la ciudad, sino que aprendan la producción armónica y en equilibrio con la naturaleza. Por eso la educación para los guna es también un modo de estar en el centro, en resistencia y conservación.

El restaurante escolar construido junto con las aulas es una de las contribuciones de mayor impacto. La institución no contaba con un espacio adecuado para la alimentación de los estudiantes. Ahora las madres de la comunidad cocinan los alimentos para los niños en el restaurante. Esta práctica se ha convertido en una actividad fundamental para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asisten a clase mejoren su capacidad de concentración, lo que impactará positivamente en su rendimiento, bienestar y salud.

El *saila* Julio no deja de “pedir las gracias” - como dice él en su español- al Gobierno Nacional, que después de tanto tiempo concentró sus esfuerzos y se fijó en las peticiones de la comunidad guna de Arquía. Las obras se han convertido en una forma de resistencia más, pues desde allí se teje la palabra, una red que fortalece la conservación de su historia y pensamiento ancestral.





# Música de amanecer



Tres minutos y medio que sirven como metáfora de inclusión: distintos territorios, etnias y edades que se encuentran en un proyecto que convierte en arte una variedad de historias, asperezas y reconstrucciones sociales. Va todo condensado en 210 segundos de música. Este es el tejido de “Amanecer”, proyecto musical dirigido por César López.

Sí, es él. López “el de la Escopetarra”. Esa característica que puede poner punto final a su descripción es también un buen punto de entrada. Es el ex baterista de Poligamia, el creador del Batallón Artístico de Reacción Inmediata, con el que comenzó a hacer activismo por la paz y la reconciliación desde 2001, llevando música para acompañar a las víctimas del conflicto armado. Y líder del movimiento 24-0, con el que espera conseguir un día completo sin muertes violentas en el país.

Para lo que corresponde a este texto, es también el artista y activista a cargo de la creación de “Amanecer”, una canción plagada de ritmos musicales que carga la idea de un país en el que cabe todo el mundo, en condiciones dignas y equitativas. Un país menos pobre.

Si se despliega se ve el recorrido que el equipo de producción hizo por cuatro regiones del país, registrando los sonidos y las vivencias que allí se encuentran. Lleva voces y sonidos del Pacífico, el Caribe, el sur y el centro de Colombia. La canción es, como expone su director, reconocimiento del esfuerzo colectivo que permitió que 5,4 millones de personas superaran la pobreza durante los últimos años, concentrándose en la batalla que ellas mismas han sostenido para lograrlo y una celebración de la paz que comenzó a tomar forma. “Eso tiene que ser un comienzo. Un punto de partida. Eso es salir de la noche oscura”, dice López.

En la práctica, el proyecto abrió los micrófonos de un estudio de grabación portátil que llegó a municipios colombianos donde hombres, mujeres,

niños y niñas fueron construyendo letra y ritmo de esta canción que López y el Departamento para la Prosperidad Social, DPS, convirtieron en un himno a la resiliencia de víctimas de la pobreza y la violencia. Los registros vinculados salieron de Guapi, Popayán, El Queremal, Cali, San Estanislao de Kostka, Barranquilla, Copacabana y Bogotá. En estos lugares representativos de las diversas regiones del país, los participantes de programas sociales del DPS integraron su talento musical.

## Salió el sol

López se fue al terreno con “un lienzo en blanco para escuchar y recibir los aportes. Que la gente contara qué siente y piensa”. Su primera certeza estaba colgada del nombre de la organización Amanecer Guapiense, en Guapi, la primera agrupación con la que se reunió.

Guapi es municipio del occidente del Cauca machucado, como todo ese departamento, por todas las etapas de la guerra. Las carreteras se suspenden cientos de kilómetros antes de conectar con el casco urbano, pese a un siglo de proyectos de conexión. Los viajeros que llegan por agua y aire pasan de largo para alcanzar la turística isla de Gorgona. Los actores de la guerra no se van del todo. Todavía hay violencia reciclada por los grupos que no se desmovilizaron.

Guapi ha sido eso. Pero es mucho más. La guerra no consumió todo. Antes que la guerra, más que la guerra y seguro después de la guerra, lo que corre por sus venas -el río como vena, entonces- es música y arte. Prevalece: “Las calles de Guapi, en el litoral Pacífico del Cauca, tienen el timbre de un pueblo alegre: motos, niños, picós y marimbas. La marimba de chonta -patrimonio inmaterial de la humanidad- es una de esas herencias africanas que hoy hace parte de la cultura ancestral del Pacífico colombiano”, publicó Radio Nacional de Colombia en su documental sobre este instrumento y su papel en la cultura.



Amanecer guapireño hace parte de ese laboratorio de vitrificación de música y arte del Pacífico que es el municipio. “Tenemos un proceso cultural con una escuela de paz, arte y cultura que se llama Tejiendo Saberes. Es de relevo musical”, cuenta Ruth Marién Valencia “Nanny”, cantante y directora del grupo. ¿Para qué? Para resistir, para aguantar y trascender. Friedrich Nietzsche dijo que “la vida sin la música es sencillamente un error, una fatiga, un exilio”. Pues aquí lo saben: “La música y arte nos hacen fuertes. Nos mantienen unidos”, asegura Nanny.

El grupo se consolidó en 2003, impulsado por el profesor Héctor Sánchez, cuando muchos de sus integrantes eran apenas niños y niñas; y otras mujeres “ya eran tan viejas como ahora”, bromea Nanny. Está sostenido por cantadoras e intérpretes de todas las edades. Las mayores fueron víctimas del desplazamiento por violencia, pero ahora rearman su vida acompañadas por el programa estatal Familias En Su Tierra, del Gobierno Nacional, que pretende la estabilización socioeconómica de sus participantes en territorios a los que han retornado, para conseguir seguridad alimentaria, reducir las carencias habitacionales y fortalecer la organización social y la cultura. Al decir de su directora, “estuvieron en medio de la balacera y siguieron adelante”; son esposas de pescadores, que intercalan la vocación de maestras de la música de la identidad con el ejercicio de pregonar el pescado que sus parejas logran sacarle al mar áspero que encuentran en la madrugada.

Con eso se encontró López en la primera estación del proyecto Amanecer. “Casi que a los pocos minutos estaba brotando la música de cada uno de los chicos. Lo primero que sale es esa frase: Salió el sol. Ilumina el espacio y lo que estamos haciendo”. En Guapi saben de música y de resiliencia. “En el Pacífico manifestamos las realidades que vivimos en nuestras expresiones culturales. Después de las dificultades que hemos tenido, hemos entendido que con el arte construimos este tejido social que es vida”, dice Nanny.

## La música conecta

Hay 142 kilómetros entre Guapi y Popayán, capital de Cauca, pero no hay carretera. Pronto, quizá, si se materializa por fin la Vía al Mar anunciada desde hace casi un siglo. Si Enar Julián Galindo Burbano quisiera ir a conocer a las integrantes del grupo guapireño que construyen con él esta canción Amanecer, tendría que tomar un avión. Enar vive en Popayán, capital de uno de los tres departamentos con mayor proporción de personas en condición de pobreza monetaria: 48,7 por ciento en 2017. Se estima que la pobreza multidimensional alcanza el 29,5 por ciento.

Pero es también uno de los territorios colombianos donde más disminuyó esa pobreza monetaria desde 2010: 14 puntos porcentuales de reducción hasta 2017. Porque es uno de los escenarios que concentra mayor esfuerzo institucional para la restitución de derechos y vida digna. Enar recibe parte de esa oferta. Estudia Música en la Universidad del Cauca respaldado por las transferencias monetarias del Programa Jóvenes en Acción, con el que el Estado apoya económicamente a estudiantes pobres mientras cursan su educación superior. Hasta el año pasado unos 380.000 universitarios colombianos habían recibido esos recursos.

Con él se encontró López en la segunda estación de Amanecer. “Una cosa bonita del proyecto es que se está permitiendo ser experimento; que nos vaya hablando en el camino, permitiendo flexibilidades, con el único interés de beneficiar a mucha gente”.

Lo musical tiene sus propias necesidades y Enar salió al paso para resolver las que tenía Amanecer. “Es una combinación de muchas culturas, muchos pensamientos y muchos estilos de todo el país -entendió-, espero que mis ideas sean de agrado”. El artista de la Escopetarra recuerda que “había unas frases a las que había que ponerle sonido. Él comenzó a proponer lo que quería: creo que es por acá, con este acorde, con este tono. Siento que para el grupo fue muy interesante porque nos empezó

a mostrar la paleta inmensa de colores que íbamos a tener en este viaje. Fue un llamado de atención: ‘Ojo que vamos a oír de todo, distintos sonidos, timbres... procesos’”.

## Los niños de El Queremal

La antigua carretera Vía al Mar comunica a Cali con El Queremal, corregimiento de Dagua. Son 46 kilómetros hasta el corregimiento, que aparece en el radar de Google, por el interés turístico que despiertan las discusiones en torno a la patrimonialización del Encuentro de Música Colombiana y Andina que allí se celebra; y en la historia de la guerra, porque su geografía lo convirtió en escenario de acción de guerrillas, narcotraficantes y paramilitares.

Pueblo y municipio conectan la cordillera con el puerto de Buenaventura, corredor que los grupos armados consideraron estratégico. En su intento por conquistarlo expulsaron a miles de campesinos: sólo entre 2000 y 2003 salieron huyendo más de 6.000 personas de territorios de El Queremal y otros nueve corregimientos, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas.

Para Amanecer fue estratégico por su resistencia y porque allí funciona desde 2013 Misky Taki, grupo sinfónico infantil dirigido por el profesor de música Aldo Dávila Vila; y porque los chicos y las chicas hacen parte de los 2,5 millones de hogares vinculados al principal programa de transferencias monetarias coordinado Prosperidad Social: Más Familias en Acción.

“Trabajamos con niños involucrándolos en la música, instruyéndolos en más de 12 instrumentos propios de Sudamérica”, dice Dávila. Lo hace convencido de que la vida sin música es un error; luego esta batalla por superar la pobreza y la guerra, ha de serlo también si no la incorpora: “Si hoy no invertimos en el tejido humano, pueden pasar 100 años más y siempre vamos a seguir en esta tónica. Y lo único que sensibiliza al ser humano es el arte”.





El exbaterista de Poligamia halló ahí una dimensión de sonoridad que no sabía que pudiera existir “tan cerca de Cali”; aceptó después: “Es música de la cordillera y de lo andino, que contrasta con la del cununo y la marimba de chonta que traíamos grabada en la computadora”. Se llevó de allí una riqueza agregada por el cuidado y la curaduría que el proyecto escolar garantiza.

## El Caribe musical

Alguien alteró la famosa frase de Alejo Carpentier, “todo suena en las Antillas”, y la expandió geográficamente: “Todo es sonido en el Caribe”. Y luego, en algún blog de melómanos dominicanos, puede leerse la continuación del silogismo: “Todo es música en el Caribe”. También en el colombiano, la tragedia, la alegría, la cotidianidad, hasta del aburrimiento, es una excusa para hacer música. Ese sonar quedó en Amanecer porque el Caribe

urbano estuvo grabado en Barranquilla, y el rural en San Estanislao de Kostka, Bolívar, conocido popularmente como Arenal.

La costa Caribe tiene altos indicadores de pobreza. Como recogió en un titular y en toda una investigación económica el codirector del Banco de la República Adolfo Meisel, la Costa Caribe perdió el siglo XX. Pero es la que más ha logrado reducir la pobreza multidimensional en los recientes años, durante esta segunda década del siglo XXI.

San Estanislao de Kostka está a orillas del Canal del Dique, arteria fluvial artificial que en el siglo XVI conectó la bahía de Cartagena con el río Magdalena, abriendo la historia de toda una subregión que ahora lleva su nombre. La edificación donde funciona su Casa de la Cultura era una metáfora del sufrimiento que vivió el municipio por cuenta de la violencia en el pasado, “donde no había más que paredes sin puertas, sin

fluido eléctrico ni agua. Estaba en el abandono”, cuenta su coordinador, Plinio Bustamante Ramos. El creador del Batallón Artístico de Reacción Inmediata encontró un gratisimo problema: la riqueza musical del pueblo le mandó más de 150 niños y niñas a quienes grabar. Y pudieron ser más, porque hay cerca de 2.000 usuarios de la Casa de la Cultura, todos convocados por la renovada edificación, desde que hace un par de años Prosperidad Social aportara recursos para rehacerla, con base en diseños elaborados por el Ministerio de Cultura. “Aquí se puede cultivar el talento. Podemos ensayar y explorar, se divierten con juegos y con los instrumentos. Con arte nos entretenemos y con arte hacemos proyectos de vida”, cuenta Bustamante.

Los buenos problemas tienen grata solución, descubrió López: “Los dividimos por grupos, con acordeones, con guitarras, con vientos, con percusión. Armamos un coro con la gente que trabaja en la Casa de la Cultura. Se puso todo el mundo a meterle el hombro a la grabación. Nos agarró la noche trabajando y hablando del Amanecer”.

Después, Barranquilla, la de las canciones, la del carnaval, la del Junior, la del sobreviviente popurrí de sonidos caribeños que encontró el equipo de producción en su búsqueda de “respuestas sobre el verdadero sentido de ser músico” y en la flauta dulce del profesor de música Víctor Hugo Cervantes Arcón, en la voz del cantante Luis Armando Monterrosa y el acordeón de Andrés Terán Camargo.

Es la misma ciudad de Nayruth Margarita Castilla Vizcaino, cantante y docente de primera infancia, con un negocio de alquiler de lavadoras; y la de Laura Vanessa Rondón, de 26 años, con una hija de 9. La voz de Nayruth se escucha por buena parte de la canción y replica en la de sus dos hijos: Alejandro Alexander y Alexander Alessandro, quienes también se vincularon al proyecto musical. Ambos hogares están vinculados a programas de transferencias monetarias del Estado.

## De la violencia a la música

Copacabana es un municipio antioqueño, suspendido del cordón de montañas que forma el Valle de Aburrá, a menos de 20 kilómetros de Medellín.

La historia de violencia del Valle de Aburrá y Antioquia es tan conocida como dolorosa. De su pobreza se suele decir menos, pero allí ha estado, aunque a la baja en la reciente década. Es, de hecho, uno de los departamentos con mejores indicadores de superación de pobreza. A 2017 afectaba al 21,3 por ciento de sus 6,5 millones de habitantes, después de haber bajado 10 puntos porcentuales. La pobreza multidimensional se estima en 15,1 por ciento.

En los pliegues de la vida en la zona también la música ha sido un lugar común. Uno más grato. Desde la guabina, la guasca, el torbellino y el bambuco hasta el rock y -¿por qué no?- el hip hop y el reguetón. En la cotidianidad del Centro Vida para el Adulto Mayor de Copacabana, por ahora evitan los dos últimos ritmos. Fue construido por una alianza entre Prosperidad Social y la Alcaldía municipal para articular desde allí los programas sociales para esa población. Parte importante de su ejercicio, al menos las mañanas de los miércoles y viernes, está vinculada a la música.

“Ensayamos grupos de coro, tropical parrandero, tuna y grupo de enseñanza triple lira y guitarra. Esto es una clínica para el corazón. La música ayuda a aliviar”, dice Gustavo Adolfo García Acevedo, el profesor encargado de la escuela.

Allí, César López encontró el cierre de la canción y un par de lecciones más sobre la música. “Verlos cantar el coro de Salió el sol, te da una sensación distinta. Hay seres humanos con mucha sabiduría que, hablando del amanecer, reivindican el mensaje que se ha construido; y que recuerdan que la música también es salud, compartir, disfrutar”, declara López.





## La edición

La escena en Bogotá es más o menos así:

Es la casa de César López, en el Park Way. Él está frente al equipo de edición, donde ha descargado cientos de horas de grabación de sonidos, instrumentos, voces y videos de lo que debe llegar a ser una sola canción. El ejercicio ha sido colectivo, pero ahora el director ve desplegarse el país gigante, diverso y multicultural que ha recorrido y que tiene que lograr representar en tres minutos y medio, sin falsear lo que aportaron en cada lugar. Se le ve a veces nervioso y a veces emocionado. Trata de disimularlo cuando explica el tamaño del material a su amigo y colega Victor Hugo Rodríguez, nacido en Guapi y radicado en Bogotá desde hace unos años.

“Enterarme de este proyecto que coordinaba César López, y saber que venían de Guapi, involucrando otros pueblos, me generó mucha expectativa y quise estar aquí, porque sé que el momento histórico de este país necesita del arte. Si tenemos arte, le damos arte”.

Se le ve más relajado -porque ya ha aprehendido buena parte del volumen de información- cuando le toca explicárselo a Verónica Atehortúa, también amiga y colega. Hay menos tensión. Ahora está concentrado en el cierre, en lo técnico y en lo artístico. Y en eso falta una voz. “Tengo una idea para una segunda toma: que en la primera parte, ‘en la noche oscura’, arranques más bajito, como más susurrado”, dice un artista a otro. Lo resuelven. “Ya lo tenemos. No hagamos más. Está muy linda esta versión”.

Responde una pregunta obligada: “Se me vinieron al cabeza cantidad de seres humanos, de anécdotas y lugares que sumaron su historia a una canción. Debemos editar algo que suene a himno y que se pueda reproducir y al tiempo dé cuenta de todo ese viaje lleno de vivencias diversas”.



Para el cierre de la canción el artista y el activista pasan de nuevo a ser lo mismo. “Hemos generado un testimonio muy importante de cómo los distintos territorios, gente, edades y procesos pueden convivir en esos tres minutos y medio”, un testimonio que no podía ser contado por una entidad de gobierno, sino por los verdaderos protagonistas de las historias, aquellos que le declararon la guerra a la pobreza y hoy ven un nuevo amanecer.





**PROSPERIDAD** SOCIAL



**GOBIERNO DE COLOMBIA**